

Medios de comunicación y *stakeholders*: contribución al debate público de la pobreza y justicia energética en España

Media and Stakeholders: Contribution to the Public Debate on Poverty and Energy Justice in Spain

Alexia Sanz-Hernández

Palabras clave

Medios sociales y digitales

- Justicia energética
- Partes interesadas
- Participación ciudadana
- Pobreza energética

Key words

Social and Digital Medias

- Energy Justice
- Stakeholders
- Citizen Participation
- Energy Poverty

Resumen

Los medios de comunicación y los diferentes actores sociales han jugado un importante papel en la formación de opinión pública en torno a la pobreza e injusticia energética en España. Una investigación con un diseño mixto ha permitido analizar quiénes se han conformado en grupos de interés, su grado de implicación y participación, sus sustanciales contribuciones para la reducción de la desigualdad y sus estrategias comunicativas. Se han analizado 478 noticias de la prensa digital, publicadas entre 2012 y 2017, utilizando análisis de contenido y análisis cualitativo con enfoque fundamentado. La investigación concluye que la pobreza energética se ha afrontado desde el plano asistencial y coyuntural y que este hecho ha propiciado la reclamación mediática de justicia energética y de empoderamiento colectivo para el logro de la ciudadanía energética.

Abstract

The media and the different social actors have played an important role in shaping public opinion about energy poverty and injustice in Spain. A mixed-design study analysed the composition of stakeholder groups, their degree of involvement and participation, their substantial contributions to the reduction of inequality, and their communication strategies. Both content analysis and qualitative analysis were used by adopting a well-founded approach to 478 news items from the digital press, published between 2012 and 2017. The study concluded that energy poverty has been addressed from the welfare and conjunctural perspective and that this has led the media advocate energy justice and collective empowerment in order to achieve energy citizenship.

Cómo citar

Sanz-Hernández, Alexia (2019). «Medios de comunicación y *stakeholders*: contribución al debate público de la pobreza y justicia energética en España». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 168: 73-92. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.168.73>)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Alexia Sanz-Hernández: Universidad de Zaragoza | alexsanz@unizar.es

INTRODUCCIÓN

A partir de 2012, las necesidades energéticas sin cubrir de la población española pasaron a ser lo suficientemente visibles como para empujar a diferentes partes interesadas (o «*stakeholders*») a tomar parte en el debate público de la pobreza energética (Sanz-Hernández, 2019).

En este artículo argumentamos, primero, que este debate se ha venido desarrollando en gran medida en los medios de comunicación, de modo que estos se han convertido en un actor relevante en la formación de opinión pública en torno a la pobreza energética. Segundo, describimos cómo los medios han ido recogiendo el cambio de pensamiento emergente hacia las concepciones de justicia, al considerar aquellos discursos de actores que reclamaban la integración de las ideas de justicia en las políticas energéticas. Por último, exponemos que los medios de comunicación se han convertido en una forma preferente de participación directa para diferentes *stakeholders*.

Los medios sociales y digitales cada vez son más considerados por la sociedad como una forma para ejercer el derecho a participar directamente en asuntos públicos (Martínez-Alfaro, 2014). Puede pensarse que esta participación, canalizada por esta vía, está relacionada con la ineficiencia de los sistemas de participación institucionalizados españoles (Subirats, 1999; Martínez-Alfaro, 2014: 164). Podría relacionarse con la existencia de restricciones en oportunidades de participación en la gobernanza del sector eléctrico, a menudo justificadas por su carácter técnico y complejo (Baldwin *et al.*, 2018). Finalmente, podría argumentarse que las políticas energéticas están limitadas por el principio de subsidiariedad y como tales han sido en gran medida moldeadas por instrumentos rígidos relacionados con un mercado único (Bouzarovski, 2018), que niega su participación a la ciudadanía.

Sea como fuere, la evidencia empírica plantea que es realista pensar que las transiciones globales que estamos testimoniando, en relación con las políticas energéticas y ambientales, serán más exitosas y justas si atienden los intereses de las partes interesadas (Reed, 2008; Simpson y Basta, 2018; Bedi, 2018). Además, se defiende la conveniencia de implementar procesos participativos involucrando a los actores y las instituciones reguladoras relevantes en la gobernanza del sector eléctrico (Toivanen *et al.*, 2017; Shaw *et al.*, 2018). Pese a ello, la consulta a todos los *stakeholders* es poco frecuente (p. ej., Hettinga *et al.*, 2018, en la implementación de energías renovables o limpias). El enfoque predominante es aquel en el que la autoridad competente asume la toma de decisiones (generalmente subcontratando a asesores o expertos) (Biljsma *et al.*, 2011); esta es la manera de proceder habitual en asuntos relacionados con las políticas energéticas nacionales o aquellos que se vinculan directamente con la pobreza energética y la justicia energética (Walker y Day, 2012; Gillard *et al.*, 2017; LaBelle, 2017).

La energía ha pasado a ser un asunto de interés público y está cobrando fuerza como línea de investigación en ciencias sociales (Aritzía *et al.*, 2017). En el contexto europeo, la consolidada tradición británica en el estudio de la «pobreza de combustible», primero, y la justicia energética, después, está siendo acompañada en la última década por estudios que están surgiendo prácticamente en todos los países. Muchos de ellos se centran en la definición y medición de la pobreza energética en los diferentes contextos nacionales, como Grecia (Papada y Kaliampakos, 2016), Chequia (Karasek y Pojar, 2018), Italia (Besagni y Borgarello, 2019) o Portugal (Simoes *et al.*, 2016). Otros marcan pautas para políticas comunes a partir de la comparación (Bouzarovski *et al.*, 2012; Thomson y Snell, 2013). El interés también se ha extendido a América Latina, sobre todo a México o Chile (García, 2014; García-Ochoa y Graizbord,

2016; Pérez-Fargallo, 2018). En México, por ejemplo, la pobreza y la justicia energética se enmarcan en abordajes ineludibles como la seguridad energética y el acceso a los recursos energéticos (Oswald, 2017). Tampoco faltan estudios muy recientes en países de otros continentes: Nigeria (Monyei *et al.*, 2018), Mozambique (Castán Broto *et al.*, 2018), Japón (Okushima, 2016) o Australia (Poruschi y Ambrey, 2018). De modo que la relación entre energía, pobreza y medio ambiente, en el marco de la justicia energética, es ahora un tema de interés sociológico de primer orden, máxime cuando ha sido poco estudiado y se puede anticipar que seguirá cobrando relevancia a nivel mundial (Aritzía *et al.*, 2017). Sin embargo, apenas se encuentra evidencia que explore la relación de la cuestión energética con la formación de la opinión pública (Sanz-Hernández, 2019).

En este artículo analizamos cómo los *stakeholders* reclaman no solo un incremento de la participación en el diseño y desarrollo de las políticas públicas energéticas (concretamente en materia de pobreza energética), sino el derecho a tomar decisiones energéticas (justicia energética), e incluso el derecho al acceso a los recursos energéticos dentro de los límites ecológicos para tener una vida digna (soberanía energética).

El estudio parte de la consideración de que los medios son una fuente de información nada desdeñable para las ciencias sociales (p. ej., Dusyk *et al.*, 2018), porque reflejan (y a la par configuran) esos discursos públicos. La estrategia metodológica elegida ha sido el análisis sociológico del discurso de un corpus documental de 478 artículos periodísticos de la prensa digital española publicados entre 2012 y 2017. Para su análisis, cada artículo fue tratado como un discurso (Conde, 2010; van-Dijk, 1985, 2018; Flowerdew y Richardson, 2018). Esta metodología ha sido escasamente utilizada en los estudios de justicia energética (Listo, 2018).

El artículo se articula en cinco bloques. En la sección segunda se muestra el marco teórico soportado en la relación entre energía y pobreza, por un lado, y la teoría de la opinión pública, por otro. Este marco se construye a partir de dos categorías sociológicas centrales, a saber, pobreza energética y justicia energética. En el último apartado de la segunda sección también se describe el marco metodológico. En el tercer apartado se presentan los resultados; la discusión se realiza en la cuarta sección y en la quinta se concluye.

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MÉTODO

Aproximaciones a la definición y medición de la pobreza energética

El análisis de la pobreza de combustible (*fuel poverty*) se desarrolló especialmente a partir de los años ochenta en el Reino Unido. Al extenderse los estudios al resto de Europa, el término de pobreza energética (*energy poverty*) fue tomando fuerza; aquí se entiende que ambos se refieren al mismo fenómeno. Los dos principales enfoques de investigación de la pobreza energética han sido el enfoque de subsistencia y el consensual (García, 2014). El primero conceptualiza la pobreza energética en relación con la dificultad de los hogares para alcanzar umbrales mínimos de temperatura que permitan el confort térmico, o bien en relación con los porcentajes de ingresos que los hogares deben destinar para su gasto energético. En esta línea se ubican los estudios pioneros de la escuela británica de Lewis (1982) o los altamente citados de Brenda Boardman (1991).

El segundo enfoque, el consensual, aspiraba a superar las limitaciones metodológicas en la medición de la pobreza energética. Su aportación fue la incorporación de las dimensiones perceptivas y valorativas (Healy, 2004) y del «relativismo». Se asienta en la perspectiva de la «privación relativa» desarrollada por Peter Townsend en sus estudios

sobre la pobreza (1979) y está en la base de la definición relativa de pobreza energética de Grevisse y Brynart (2011). A estos dos enfoques se han sumado propuestas más recientes que atienden también a la dimensión histórico-contextual, entendiendo que el tiempo y el lugar (los usos sociales de la energía) moldean las necesidades, los satisfactores y los bienes económicos de acuerdo con convenciones sociales y culturales (García, 2014).

La sucesiva redefinición teórica de la noción de pobreza energética ha venido acompañada de evidencia empírica a partir de indicadores objetivos y subjetivos más afinados, y de modelos de medición que han permitido la cuantificación y la cualificación del fenómeno en cada país (Robinson *et al.*, 2018), así como la comparabilidad entre contextos (p. ej., Bonatz, 2019).

En el caso español han predominado los estudios a partir de indicadores objetivos (Romero *et al.*, 2018; Aristondo y Onaindia, 2018). Sin embargo, el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), correspondiente a 2016, se basa en cuatro indicadores primarios recomendados por el Observatorio Europeo de la Pobreza de la Energía (EPOV). Dos se calculan a partir de los gastos e ingresos de los hogares, y los otros dos a partir de las percepciones y declaraciones de los hogares. Aplicando esta metodología se calcula que, en 2016, un 10% de los hogares españoles vivían con bajas temperaturas y sufrían retrasos en el pago de sus facturas. En 2007, justo antes de la crisis económica, se hablaría de un 6% de hogares en esta situación. Con los nuevos indicadores, la magnitud del problema parece mayor que la desvelada en los informes anteriores, emitidos también desde la ACA en 2012, 2014 y 2016. En ellos se hablaba de 19,1 millones de personas experimentando condiciones asociadas con la pobreza energética en 2010, lo que equivaldría al 41% de la población residente en España. En 2016, la cantidad se habría reducido a 13,2 millo-

nes de personas y 5,1 millones de hogares (Tirado Herrero *et al.*, 2018).

A efectos de esta investigación, entendemos que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar servicios energéticos suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas, personales y sociales. El concepto de necesidad es clave, no circunscribiéndose solo al bienestar biológico o físico. Marta Nussbaum (2011) menciona diez capacidades o partes constitutivas del desarrollo humano, de modo que la pobreza se entendería como una privación de dichas capacidades (Day *et al.*, 2016). En la misma línea, Nielsen y Axelsen (2016) mencionan tres metacategorías de necesidades en las que pueden conceptualizarse las vinculadas con la energía: a) el bienestar biológico y físico; b) la autonomía, formación y conocimiento; y c) la búsqueda de fines valiosos dentro de la comunidad. Esta última nos permite enlazar con la noción de justicia energética.

De la conceptualización de la pobreza energética a la reclamación de la justicia energética

Hablar de justicia energética es esencialmente reconocer la capacidad de las personas para tomar decisiones energéticas que mejoren su calidad de vida (Castán Broto *et al.*, 2018). Numerosos autores defienden el establecimiento de estándares de justicia (Roberts, 2013) o umbrales de suficiencia (Nielsen y Axelsen, 2016; Simpson y Basta, 2018) que aseguren el acceso a suministros energéticos asequibles, seguros, sostenibles y modernos para todos, tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Kozulj, 2009; Franco *et al.*, 2017) y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Asamblea General de Naciones Unidas (2015). El sector de la energía contribuye notablemente a la generación de desigualdad global (Heffron *et al.*, 2018), por lo que es importante que la justicia impregne

la toma de decisiones en el sector (Heffron y McCauley, 2017). Este hecho ha llamado la atención de la comunidad científica recientemente y se ha multiplicado la evidencia multidisciplinar centrada en conceptualizar y medir las injusticias que el ciclo de vida de la energía genera (Fortier *et al.*, 2019), y ofrecer soluciones en diferentes regiones del mundo (Malakar *et al.*, 2019).

En sus orígenes, el enfoque de justicia energética puede relacionarse con el discurso crítico emergente del activismo ambiental (Bickerstaff *et al.*, 2013; Pérez *et al.*, 2015); este ligaba la sostenibilidad ambiental con la justicia social (Agyeman, 2013). Sin embargo, las nociones de justicia ambiental y de justicia energética ni son conceptos iguales ni responden a la misma lógica (Jenkins, 2018; Williams y Doyon, 2019). Hoy, la justicia energética se muestra como una herramienta conceptual, analítica y de toma de decisiones (Sovacool y Dworkin, 2015); en suma, como una estrategia práctica que impregna las agendas políticas y los modelos de negocios en el sector energético mundial. Podemos definirla como «un sistema energético global que distribuye equitativamente los beneficios y la carga de los servicios energéticos, y uno que contribuye a una toma de decisiones sobre energía más representativa e inclusiva» (Sovacool *et al.*, 2017: 677).

Los discursos sobre la justicia energética y su marco teórico se han construido en torno a tres patas, a saber, la distribución de los recursos, el reconocimiento de todos los puntos de vista y la imparcialidad en el proceso de toma de decisiones (distribución, reconocimiento y justicia procesal) (Schlossberg, 2009; Fuller y McCauley, 2016). En 2016, Jenkins, McCauley, Heffron, Stephan y Rehner presentan una revisión de la literatura existente en torno a la noción de justicia energética y hacen una propuesta teórica de rearticulación del marco de las tres patas en un eje evaluativo-normativo, que es el adoptado en este estudio.

La formación de la opinión pública en torno a la pobreza energética a partir del posicionamiento de los stakeholders

La teoría sobre la opinión pública más reciente enfatiza la estrecha conexión existente entre el espacio público y la comunicación política (Ferry *et al.*, 1992). Los elementos teóricos que sustentan esta investigación son: a) la opinión pública es un proceso dinámico, multidimensional y resultante de una interacción continuada de múltiples actores (Crespi, 2000; Wolton, 1997); b) la esfera social es crucial porque trastoca la estructura de la vida pública, afectando por lo tanto a la opinión pública (Arendt, 2005); c) la opinión pública es una resultante de un doble proceso de consenso/disenso que cada vez tiende a desarrollarse más en un espacio digital que da autonomía para la deliberación (Castells, 2012; Alonso, 2016), y visibiliza problemas que no están en la agenda pública (Tascón y Quintana, 2012); y d) la opinión pública es una herramienta tanto de dominación como de contención o regulación del poder (Habermas, 1981), constituyéndose en pieza clave para superar los déficits democráticos de las políticas contemporáneas (Boladeras, 2011).

En 2012, con el inicio del debate mediático español sobre la pobreza energética, se abre el proceso de intercambio público de discursos. No existía conciencia social de la pobreza energética hasta que esta se empezó a traducir en cifras y en narrativas sobre experiencias vitales, visibilizando un problema público que demandaba incorporación en la agenda política y urgente afrontamiento. ¿Quiénes fueron los que generaron este debate y contribuyeron a la formación de la opinión pública?

A la hora de analizar a los protagonistas de la interacción pública se optó por incorporar la aproximación de los *stakeholders*, a partir de la conocida noción original de Freeman (Freeman y Reed, 1983; Freeman, 1984). En esta investigación son definidos como

aquellos grupos o personas afectadas y que afectan a otros en el ámbito que nos ocupa; es decir, actores e instituciones reguladoras que articulan la gobernanza en el sector eléctrico.

Desde un punto de vista empírico, los *stakeholders* considerados han sido únicamente aquellos que se han manifestado públicamente. Estos han sido clasificados en cinco grupos, atendiendo al conocimiento del que son depositarios, su capacidad de decisión y su capacidad de afectación en la formación de opinión pública y en la modificación de la agenda política en materia de pobreza y justicia energética (figura 1).

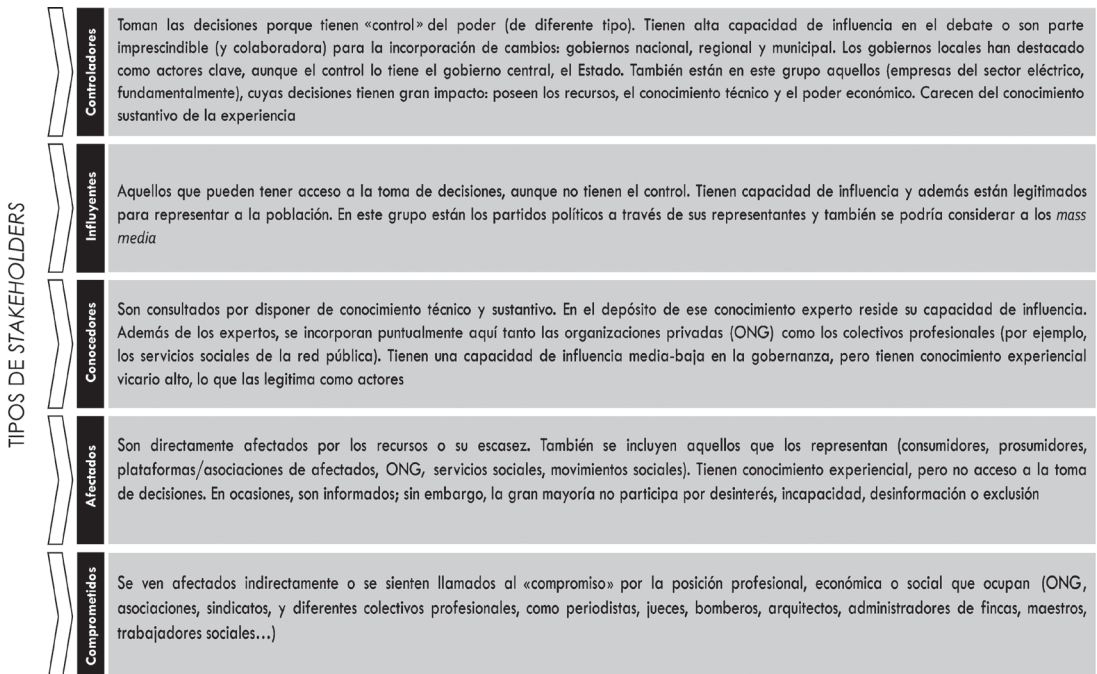
Consecuentemente, lo relevante en el diseño metodológico fue la selección de los *stakeholders*, que venían dados por la propia investigación, sino la elección de los medios de comunicación que recogían su discurso conformador de opinión pública.

El diseño de investigación y la conformación del corpus discursivo

Para la investigación se utilizó un diseño metodológico mixto, combinando una estrategia cualitativa con otra descriptiva-cuantitativa para el análisis de todos los artículos periodísticos. Estos fueron localizados a través de buscadores en los seis medios de prensa digital seleccionados, introduciendo la palabra clave «pobreza energética». La primera estrategia implicaba la utilización de técnicas analíticas cualitativas (análisis temático), en el marco de la teoría fundamentada de Glaser y Strauss formulada en 1967 (Charmaz, 2008), y con el soporte del programa MAXQDA. Las categorías no se delimitaron *a priori*, sino que surgieron a lo largo del proceso de codificación abierta. El análisis cualitativo puso el foco en la identificación de temáticas, regularidades, posiciones discursivas y roles de los *stakeholders*.

La estrategia metodológica cuantitativa se sustentaba en el clásico análisis de con-

FIGURA 1. Tipología de Stakeholders en relación con la pobreza y justicia energética



tenido con una codificación previa (Bernand *et al.*, 2016). El objetivo era medir variables relacionadas, por ejemplo, con la visibilidad (número de artículos, presencia de los *stakeholders* y fecha de publicación), la temática abordada, los emisores principales a los que se da voz en la noticia, y la motivación del *stakeholder* al expresarse en los medios.

En esta fase se conformó una base de datos para organizar la información y para realizar un análisis descriptivo-cuantitativo primario, que atendiera a numerosas variables. Esta herramienta, en la que no se puede profundizar, fue esencial para respaldar las formulaciones teóricas resultantes del análisis sociológico crítico de los discursos.

Los discursos (artículos) analizados fueron todos los que se publicaron en seis periódicos españoles con edición digital. La selección de estos medios atendió a tres criterios: a) la relevancia en su contexto, b) la representación de tres niveles territoriales (nacional, autonómico y local), y c) la base ideológica con la que puede identificarse al medio (Nogales y Mancinas, 2014: 314).

El País y *ABC* fueron los dos periódicos nacionales seleccionados; ambos tienen vocación de cobertura informativa nacional y son dos medios de referencia en España. *El País* representa la ideología de centro-izquierda y ha sido el primer periódico de referencia desde su aparición en los años setenta, con las mayores cifras en su tirada promedio (226.077 copias) y promedio de difusión (175.041 copias en 2017) (según la Oficina de Justificación de la Difusión, OJD, a cargo de la contabilidad para el seguimiento de los medios). Por su parte, *ABC*, de posición ideológica conservadora, alcanzó las 115.291 copias de tirada media en 2017.

En el nivel autonómico, se contextualizó la investigación en la comunidad autónoma de Aragón, debido a la existencia de estudios previos y pioneros sobre el impacto de la pobreza energética en el territorio (Scarpellini

et al., 2015) y sobre el papel de diferentes actores regionales (Scarpellini *et al.*, 2017). En este contexto autonómico, *Heraldo de Aragón* y *Periódico de Aragón* son la prensa de referencia. Además, para atender al nivel local se decidió incorporar también los diarios territoriales de las otras dos provincias de Aragón, Huesca y Teruel (*Diario del Alto Aragón* y *Diario de Teruel*, respectivamente), puesto que los regionales centran su atención sobre todo en la capital, Zaragoza, que reúne al 53% de la población de la región (Instituto Nacional de Estadística, 2018). A pesar de que el Estado español tiene todas las competencias en política energética (artículo 149.1.13 de la Constitución española), se consideró fundamental la incorporación del análisis multinivel territorial, para la comprensión del papel de los diferentes *stakeholders* en el afrontamiento de la pobreza energética en el territorio.

Las unidades de muestreo (artículos abordados como discursos) conformaron una muestra final que cubría el requisito de saturación informativa y posibilitaba tener un corpus discursivo capaz de dar respuesta al interés investigativo.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En esta sección presentamos los resultados que nos ayudan a comprender el proceso de formación de la opinión pública española en materia de pobreza energética en tres bloques: 1) la visibilidad de los *stakeholders*, 2) las temáticas destacadas en los discursos, y 3) las motivaciones y estrategias comunicativas relevantes.

¿Quiénes y qué? Actores y ámbitos de participación

En el año 2012 se agravan los impactos sociales de la crisis económica y se inicia la construcción pública de la cuestión de la pobreza energética, primero, y el debate sobre la justicia energética, después. Es el mismo

TABLA 1. Categorías de participación de los stakeholders en el debate público en torno a pobreza energética

Stakeholder	Niveles de participación	Rol	Posición socio-política	Conocimiento disponible
Compañías suministradoras	Control	Decisor		Sustantivo/técnico
Gobierno nacional	Control	Decisor		Normativo/estratégico
Gobiernos regionales	Control/colaboración	Decisor/ejecutor	Toman parte	
Gobiernos municipales	Colaboración	Ejecutor		Procedimental/experiencial
Partidos políticos	Influencia	Teórico/ideólogo		Estratégico
Expertos	Influencia/consulta	Suministrador	Son consultados	Sustantivo/técnico
Asociaciones/ong/ Servicios sociales	Consulta/información	Suministrador/ conocedor	Son informados	Experiencial
Afectados	Información/no participación	Receptor pasivo	Son afectados	Experiencial

Fuente: Elaboración propia.

año en que el término empezó a usarse en la prensa (gráfico 1).

Los medios explicarían y justificarían la emergencia, tanto de la nueva noción como de la realidad que reflejaba, en los siguientes términos:

Cuando ACA (Asociación de Ciencias Ambientales) publicó la primera edición de este estudio, en 2012, casi nadie hablaba de pobreza energética en España [...]. Pero como no deja de crecer, el problema ha acabado emergiendo hasta convertirse en objeto de movilización social (con colectivos muy activos como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o la Alianza contra la Pobreza Energética) y colarse de manera destacada en el debate político (Raquel Vidales, «La pobreza energética se dispara», *El País*, 27/3/14)¹.

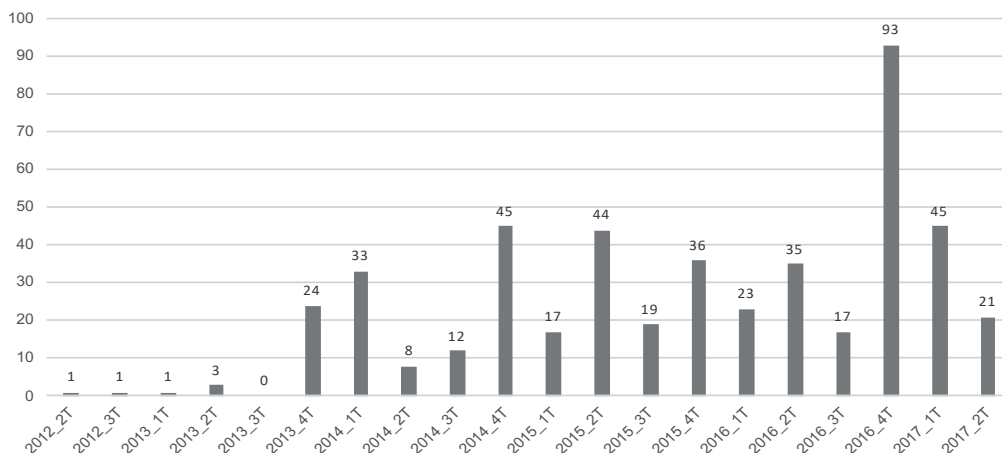
Los *stakeholders* tomaron la voz en ese debate público, desde diferentes roles y po-

siciones discursivas, y con diversa capacidad de influencia (tabla 1).

Si observamos cuál ha sido la presencia mediática de los diferentes *stakeholders* en este periodo y cuál el elemento central de su mensaje (gráfico 2), hay que destacar, en primer lugar, la escasa participación directa de los afectados o grupos que los aglutinan, muy focalizada además en la etapa inicial (3% de los artículos). La mayor parte de sus manifestaciones se vinculan con las carencias de los hogares; igualmente, llaman la atención en torno a la emergencia social y piden el amparo institucional y legal, así como la reducción de los precios energéticos.

En segundo lugar, es destacable la discreta, poco influyente y continuada participación de los expertos (8%), para hablar desde un punto de vista técnico de la situación de los hogares, dar cuenta de investigaciones relacionadas con la cuantificación e identificación de la pobreza energética, planear acciones de diseminación y, en menor medida, para participar en el debate acerca

¹ Para ajustarse a las exigencias de extensión del trabajo presentado se ha optado por no hacer referencia a los artículos específicos manejados.

GRÁFICO 1. Evolución trimestral del número de noticias sobre pobreza energética (2012-2017)

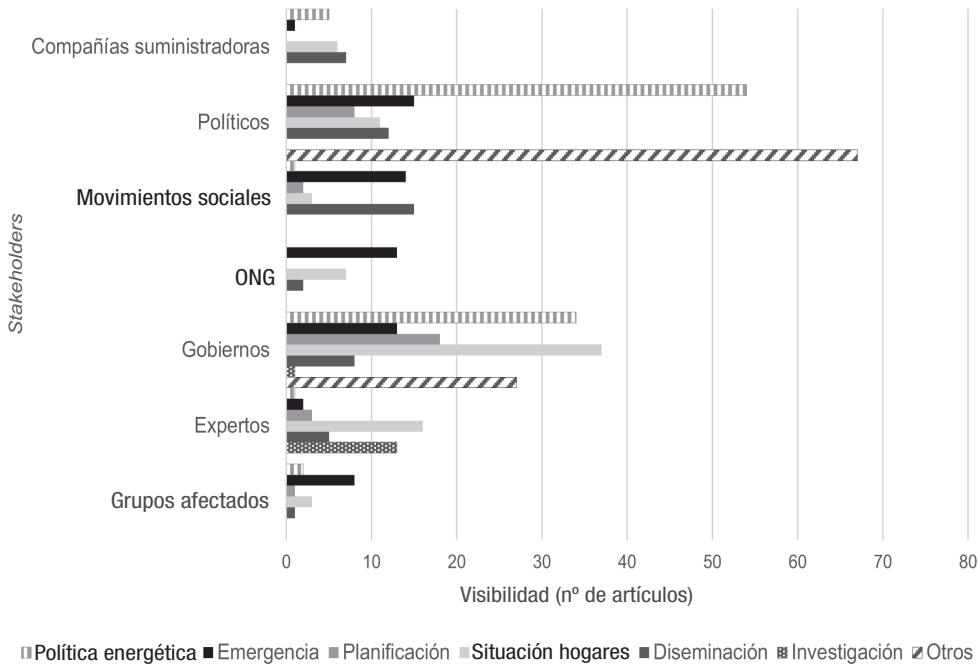
de política o planificación energética. El colectivo rehúye ubicarse en el marco de la emergencia social. Al contrario que otros discursos, la voz de los expertos interesa a los medios en todo momento y se ha recogido regularmente a lo largo de todo el periodo analizado, aunque su protagonismo ha sido poco relevante.

En tercer lugar, las ONG (7%) y los movimientos sociales (5%) tienen un escaso papel, pero muy sobresaliente. Su relevancia se asienta no tanto en su frecuencia de aparición como en su efectiva y activista participación en momentos decisivos (2014 e invierno de 2016-2017).

Mención especial requiere la participación del gobierno en sus diferentes niveles territoriales, con un 29%. Mientras que la aparición de los gobiernos locales se vincula con situaciones de emergencia social, prestación de ayudas urgentes a los hogares y afrontamiento de los problemas (temas como convenios con suministradoras, entidades bancarias, incremento de presupuestos, acciones conjuntas con los servicios sociales, etc.), el gobierno regional se vincula especialmente con la planificación energé-

tica y la pretensión de articular legislación autonómica. Finalmente, la mayor parte de las noticias en que el gobierno nacional ocupa un protagonismo central (6%) se ubican cronológicamente en 2016, año en el que aparecen 22 de las escasas 28 noticias que han protagonizado en todo el periodo, y que se dedican especialmente a política energética. Su protagonismo es realmente tardío y sus discursos evolucionan en términos generales desde la negación, la falta de reconocimiento de los afectados, la justificación de la inacción y la disputa competencial a la defensa de la negociación y a la justificación de la acción legislativa a finales de 2016.

Son los partidos políticos quienes más han participado a través de los medios de comunicación (167 noticias, un 35%), en la mayoría de las ocasiones como parte de la comunicación electoral. Inicialmente la temática fue patrimonio de los nuevos partidos de izquierdas, como Podemos, que manejó con eficiencia la transición de la indignación a la esperanza (Lluch, 2015). Con el tiempo se testimonia una generalización de la apropiación de la temática por parte de todos los partidos políticos y, consecuentemente, la incorporación «natural» del tema de la justi-

GRÁFICO 2. ¿Quiénes se implican y qué dicen?

cia energética en el discurso político, en sustitución del de la caridad asistencial. Es un proceso comunicativo de efectos bidireccionales y de retroalimentación continua entre grupos que ha posibilitado la incorporación en el debate político de la cuestión de la justicia energética.

La participación mediática del sector privado (compañías suministradoras) es casi anecdótica e indirecta. En sus manifestaciones no hay un reconocimiento de la emergencia social y el relato relativiza o aspira a difuminar la problemática e, incluso, a deslegitimar o cuestionar los hábitos y el comportamiento de los afectados.

Por último, puede encontrarse un grupo de noticias muy heterogéneas, pero relevantes (9%), que vienen generadas por diferentes actores comprometidos que se han pronunciado en momentos puntuales, como, por ejemplo, colectivos profesionales (bom-

beros, administradores de fincas, urbanistas, etc.), tribunales y jueces, sindicatos, entidades bancarias que se suman a las medidas de afrontamiento de la pobreza energética, instituciones como el Defensor del Pueblo, asociaciones de diversa índole e incluso periodistas que escriben aportando su visión personal.

La cuestión que más se ha recogido en la prensa ha sido la de la política energética (28% de las noticias), que ha sido monopolizada por gobiernos y políticos. La situación y descripción de los hogares afectados (25%) ha sido una seria preocupación, sobre todo, para los gobiernos municipales y para los expertos, mientras que la temática de la emergencia social y la desigualdad e injusticia (19%) ha activado la participación de un mayor número de *stakeholders*: políticos, movimientos sociales, ONG, gobiernos locales, grupos de afectados y otros agentes

comprometidos. Le siguen los artículos de diseminación (15%) a cargo de movimientos sociales y partidos políticos, artículos sobre planificación energética (9%), que preocupa a gobiernos y políticos y, finalmente, investigación al respecto (4%), concentrada en el grupo de expertos.

Resumiendo, en este punto, el análisis a través de los medios nos permite destacar: 1) un proceso de inversión desde lo privado hacia lo público en la responsabilidad asumida a la hora de gestionar los mecanismos de afrontamiento de las situaciones de vulnerabilidad energética en España; 2) la lentitud de lo público estatal en la toma de decisiones y acción para el establecimiento de mecanismos; 3) una clara tendencia a la monopolización del protagonismo por parte de entidades públicas y estatales, y especialmente por parte de los representantes de los partidos políticos; y 4) la invisibilidad de los profesionales más directamente relacionados con la lucha contra la pobreza energética, especialmente los trabajadores sociales de la red pública (Scarpellini *et al.*, 2017).

Stakeholders, mecanismos de participación y estrategias comunicativas

Las necesidades de los *stakeholders* (propias o percibidas en el entorno) influyen directamente en el motivo de la participación, y están estrechamente relacionadas con los valores del entorno (Simpson y Basta, 2018: 61). El análisis de los textos ha permitido descubrir cinco motivaciones sobresalientes en los mensajes, que se relacionan con otros tantos tipos «ideales» de estrategias comunicativas de los *stakeholders*. Siguiendo la distinción de Baccaro (2006) entre modelo distributivo e integrativo, las tres primeras estrategias identificadas (legitimadora, reivindicativa y aleccionadora) tienen en común el uso de una acción comunicativa «egocéntrica» basada en el cálculo estratégico (modelo distributivo), mientras que las

dos restantes (reflexiva y propositiva) suelen optar por una acción comunicativa asentada en la razón y la argumentación (modelo integrativo).

La estrategia legitimadora plantea la defensa de posiciones ideológicas, de ahí que de su análisis se puedan derivar las dinámicas de poder entre los diferentes actores (por ejemplo, la cuestión competencial que enfrenta a gobiernos locales, regionales y el central). La *reivindicativa* adopta una forma discursiva opositora o alternativa, que coloca al excluido en el centro del problema, recuperándolo como ciudadano; es un discurso que a la denuncia social suma un componente de acción social que llama a la protesta, la rebelión y la búsqueda de responsabilidades externas focalizadas en las grandes compañías eléctricas y gobiernos fundamentalmente. La emergencia social es el elemento temático que más sobresale en estos textos, para destacarla recurren con más frecuencia, sin ser exclusivo de ellos, al nivel práxico y al soporte emocional, con relatos de los afectados que enfatizan sus necesidades básicas no cubiertas.

La estrategia aleccionadora-diseminadora incide en procedimientos para reducir el problema, recalcando la necesidad de formación para la «no dependencia» del excluido. Esto se hace sobre todo desde discursos donde destaca la dimensión estructural-institucional y que enfatizan la solidaridad y el carácter estructural de la pobreza energética (sujeto vulnerabilizado que necesita apoyo institucional para ser protagonista de su proyecto vital). También pueden observarse otros discursos de marcado carácter paternalista, e incluso aporafóbico, en los que se resalta la visión individualizadora, identificándose a las personas en riesgo de pobreza energética con personas que prefieren ser dependientes de prestaciones y no tienen motivación alguna por superar su situación. En este segundo caso, y cuando se convierte en moralizante, el discurso contiene rasgos de «culpabilización del excluido», remar-

cando la idea de la responsabilidad individual del afectado.

La *estrategia reflexiva* recoge una variedad de textos que incluyen desde descripción/análisis cuantitativo, experto o mediático, recurriendo a fuentes oficiales, hasta textos que desde enfoques más cualitativos aspiran a mostrar el fenómeno en todas sus facetas. Incorporan una actitud social de crítica con el objetivo de caminar hacia la integración, aprendizaje y transformación social.

Por su parte, los textos *propositivos* incorporan propuestas de mejora o sugieren estrategias de acción para resolver el problema. En ellos se observa, por un lado, cierta psicologización (recurrencia a procesos y dinámicas psicológicas en el relato como motivación, actitud, resiliencia...) y, por otro, un intencionado (pero no siempre conseguido) deseo de despolitización.

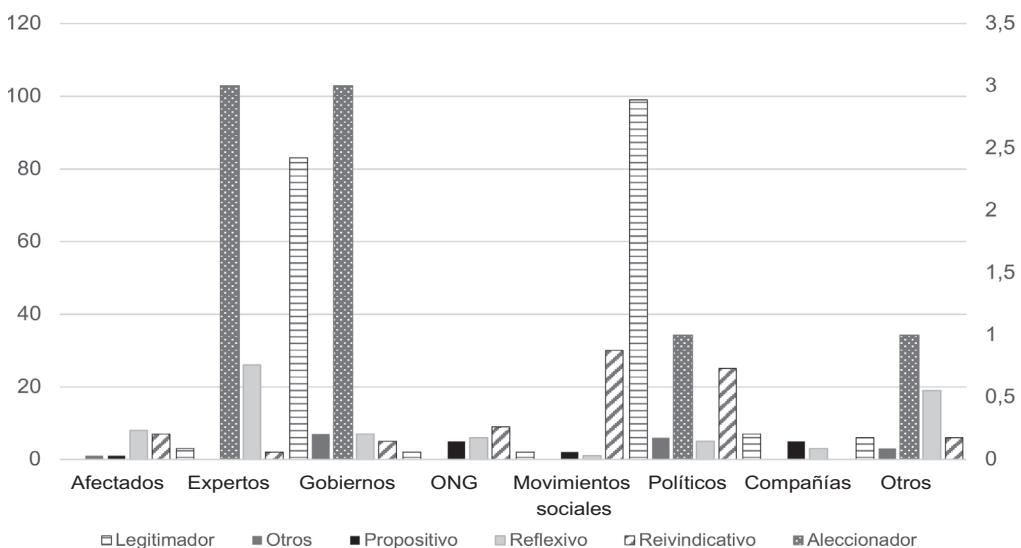
En términos generales, la mayor parte de los textos analizados (42%) tiene un carácter legitimador, predominando en este bloque los de los colectivos con mayor capacidad de decisión e influencia: gobiernos, partidos po-

líticos y empresas. Le siguen los artículos propositivos (19%), estrategia presente en todos los grupos, pero relevante en los que mayor capacidad de acción poseen, como los gobiernos locales. Los reivindicativos (18%) se concentran en los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, grupos de afectados y otros colectivos comprometidos, pero también, aunque en menor grado, en los gobiernos locales y los partidos políticos de la oposición. Los artículos reflexivos (16%) se vinculan con expertos, ONG, afectados y otros. Finalmente, los aleccionadores (2%) provienen sobre todo del gobierno nacional y del colectivo de expertos (gráfico 3).

DISCUSIÓN

El estudio ha permitido profundizar en la construcción social de la cuestión de la energía como asunto público y el papel de diferentes stakeholders en la formación de la opinión pública en este ámbito (ver tabla 2). Para ello se ha considerado relevante atender a: 1) los mecanismos de participa-

GRÁFICO 3. Estrategias comunicativas y formas discursivas según stakeholders



ción de los *stakeholders* (contemplando el principio de construcción de la participación en movimiento); 2) las relaciones dialógicas o conflictivas entre lógicas subyacentes sostenidas por cada *stakeholder* (principio dialógico), y 3) la comprensión de la importancia de cada una de las partes en el sistema de la energía (principio de interdependencia).

El primero va referido a que la participación no es algo dado, sino que generalmente hay que reclamarla; es procesual, dinámica y cambiante, y así se ha manifestado en el caso analizado: como un proceso de reclamación de empoderamiento de la ciudadanía hacia la justicia energética. Desde este punto de vista, y en el periodo estudiado, puede decirse que el sistema de energía ha incrementado su capacidad de integrar voces diferentes, aunque no parece haberlo hecho articulando más o mejores mecanismos de participación. Desde un punto de vista cronológico, el proceso analizado refleja una evolución clara en lo que a protagonismo de los *stakeholders* se refiere. La evolución observada va desde lo privado a lo público, de lo instituyente a lo instituido, de lo civil a lo político y de lo local a lo nacional.

Para socializar el asunto de la desigualdad e injusticia energética, los *stakeholders* «conocedores» optaron primero, entre otras formas participativas, por la comunicación (de flujo unilateral y no demandante de una estructura de integración previa para canalizar la información, como exigiría la participación plena). Le acompañarían las movilizaciones en las calles de los «comprometidos», y tras estas, finalmente, el debate político.

En segundo lugar, las estrategias comunicativas no fueron homogéneas, sino que adoptaron formas discursivas diferentes con lógicas igualmente divergentes (una dominante y otras emergentes y alternativas). Estas concurren, de forma complementaria unas veces y antagonista otras, en un proceso relacional (según el principio dialógico),

cuyo resultado, no obstante, no parece haber sido el incremento de participación real y efectiva de los diferentes grupos en el diseño de la política energética nacional.

En tercer lugar, podemos hablar del principio de interdependencia, por el que todos los actores implicados se muestran como necesarios para mejorar el sistema de la energía, en tanto en cuanto todos ellos lo reflejan y todos potencialmente pueden contribuir a transformarlo. Esta capacidad de transformación reside en la posesión de capacidades para desarrollar algún tipo de conocimiento (sustantivo, estratégico/institucional, y/o experiencial).

Para concluir, y retomando la sugerencia de Jenkins *et al.* (2016), cabe decir que los *stakeholders* han impulsado el debate necesario de la justicia energética en dos planos: el evaluativo (¿qué ha pasado?) y el normativo (¿cómo remediarlo?).

En el primer plano se distinguen tres aportaciones de los *stakeholders* en relación con la tipología propuesta por los autores mencionados, a partir de Fuller y McCauley (2016) (justicia distributiva, de reconocimiento y procesal).

En relación con la *justicia distributiva*, los *stakeholders* han incidido en la perspectiva de consumo y, en concreto, en el acceso desigual a los suministros, la desigualdad de cargas en el pago de la energía y las limitaciones de parte de la población para el acceso, uso y disfrute de ella.

En relación con la *justicia de reconocimiento*, los *stakeholders* han denunciado a través de los medios de comunicación la invisibilidad de los afectados, su vulnerabilidad y dificultad para cubrir sus necesidades biológicas y físicas, así como la desigualdad para ejercer sus derechos políticos. Además han reclamado la legitimidad de sus protestas y reivindicaciones ante los intentos deslegitimadores de actores prominentes que ejercían el control, exigiendo la discusión abierta y el compromiso de los gobiernos.

TABLA 2. Contribución de los stakeholders a la formación de opinión pública sobre pobreza energética

Partes comprometidas	Contenido del mensaje (Por frecuencia de aparición)	Estrategias comunicativas dominantes	Presencia (% del total)	Momento de protagonismo
Afectados	Carencias de los hogares Emergencia social Petición de amparo de legislación Petición de reducción de precios energéticos	Reflexiva Denuncia social	3	Primeros momentos 2012-2014 2017
Expertos	Situación de los hogares Cuantificación e identificación de la pobreza energética	Reflexiva Propositiva	8	Presencia continuada pero modesta
ONG	Acciones de diseminación Política/planificación energética Emergencia social	Reflexiva Reivindicativa	5	2014 especialmente
Movimientos sociales y asociaciones	Emergencia social Situación de los hogares Emergencia social Situación de los hogares	Reivindicativa-Denuncia social	7	2014 y 2016 (otoño/invierno)
Gobiernos (multinivel) (29%)	Emergencia social Situación de los hogares Prestación de ayudas urgentes Respuestas para afrontamiento	Reflexiva Legitimadora Propositiva	15	Presencia continuada
	Planificación energética Legislación para emergencia social	Legitimadora	8	2015-2017
	Política energética Regulación bono social	Legitimadora	6	2016-2017
Partidos políticos	Excusa para lucha política Política/planificación energética Emergencia social	Legitimadora Propositiva	35	Presencia continuada Primeros los partidos de la oposición
Sector privado (compañías suministradoras)	Diseminación Política energética Medidas para ayudar a los hogares	Legitimador Propositivo	4	Permanente pero indirecta
Otros	Multidimensional	Propositiva Reflexiva	9	Especialmente en las últimas etapas

Finalmente, en relación con la *justicia procesal* (referida al acceso a los procesos de toma de decisiones), los *stakeholders* han evidenciado los mecanismos de exclusión y vulnerabilidad, pero también han aportado propuestas en torno a los mecanismos de inclusión para avanzar hacia la justicia energética. Esto se habría alcanzado de tres formas esenciales:

- a) Movilización del conocimiento en sus diversas dimensiones: conocimiento sustantivo, estratégico/normativo/procedimental y, en tercer lugar, el experiencial. El sustantivo (acerca del problema, su conceptualización, definición, medición, cuantificación, etc.) es aportado fundamentalmente por expertos y profesionales. El estratégico, normativo y procedimental (relacionados directamente con la forma en que se debe actuar) es custodiado por gobiernos, partidos políticos y organizaciones. Y, finalmente, el experiencial es el que está vinculado con los relatos y las historias personales y colectivas en torno a la experiencia de los afectados; este aporta la dimensión emocional, valorativa y «real».
- b) Difusión de información y aprendizaje social. Los *stakeholders* han realizado una importante labor de diseminación y concienciación, de activación del debate y de visibilización de carencias, pugnas e incertidumbres. Igualmente han contribuido en la reclamación y revelación de información sobre patrones de consumo de energía, por ejemplo, y en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de gobiernos y compañías.
- c) El tercer modo de avanzar hacia la justicia energética es poder, querer y saber participar, además de estar representado en las instituciones decisorias. La ciudadanía está muy lejos de los organismos de toma de decisiones en materia energética, como hemos visto. La participación

tendría impacto en las decisiones tomadas, además de contribuir a la mejora de la calidad democrática y el trabajo colectivo de afrontamiento de la desigualdad.

En el segundo plano, el normativo, los *stakeholders* identificaron el problema, exigieron reconocimiento de la población afectada y propusieron estrategias de afrontamiento denunciando las injusticias que se producían en España. Con ello abrieron un debate necesario que se sigue librando, en medio de un proceso de aprendizaje social y de formación de opinión pública.

CONCLUSIONES

El caso presentado es un ejemplo de exigencia ciudadana de revisión de las políticas energéticas en lo que al acceso y uso del suministro energético se refiere y la reivindicación de la energía como un elemento central de la vida de cualquier comunidad y sociedad justa. El contexto nacional de participación presentado es deficitario y poco facilitador de participación ciudadana en la toma de decisiones acerca de la distribución y consumo de la energía y distribución de sus costes y beneficios. Los *stakeholders* han encontrado en los medios un canal de participación en el debate público en torno a la pobreza, la desigualdad y la justicia energética, que en muchos casos ha servido de sustituto de los mecanismos de participación institucionalizados. A través de estos han mostrado sus necesidades de bienestar biológico y físico, autonomía y formación, y control de las condiciones políticas y materiales del entorno en materia de energía.

Los medios de comunicación han jugado un papel central en la construcción y socialización del constructo de «pobreza energética», por un lado, y en la apertura del debate en torno a la justicia energética, por otro. Se han convertido en un *stakeholder* más, en la medida en que han participado o reflejado

esta problemática social recogiendo las voces de otros (a través de artículos de información, de seguimiento de políticas públicas, de opinión, tribunas, editoriales, opiniones personales en artículos, cobertura repetida, etc.).

A través de los medios se han podido analizar los discursos de las partes interesadas en tomar parte en el debate público (quién), el contenido de su mensaje directamente vinculado a las necesidades percibidas propias o del entorno (qué) y el modo en que las han trasladado (estrategias comunicativas) (cómo).

La investigación tiene una limitación, puesto que solo recoge los discursos de aquellos que se han expresado por los medios sociales y digitales, dejando fuera la opinión de una parte importante de la población, sobre todo del colectivo profesional y de la población más vulnerable. Para esto debe abundarse empíricamente en otros estudios con otros diseños metodológicos. Hay una línea que se abre de gran interés y que se ha apuntado en este estudio, se trata del ciberactivismo y la capacidad de los medios digitales y las redes sociales para visibilizar las problemáticas que no están en la agenda pública.

Puede concluirse que, con su práctica participativa mediática, los *stakeholders* más activos plantearon una revisión de las diferentes dimensiones de la noción de ciudadanía (Kiviniemi, 1999). En el nivel práxico, aglutinador de las prácticas sociopolíticas, acercaron a la sociedad española la cruda realidad de la pobreza energética. En el nivel ideológico y cultural (vinculado con los criterios culturales que dan sentido a las identidades, a la comunidad y a la pertenencia a ella) cuestionaron los fundamentos educativos y culturales sostenedores de la desigualdad y la injusticia energética. Y, finalmente, en el nivel institucional y formal (marco de derechos y deberes que sostiene la relación de pertenencia cívica), reclamaron más me-

canismos de participación y el derecho del ciudadano a participar en la toma de decisiones. En suma, reclamaron la ciudadanía energética en un marco de justicia.

BIBLIOGRAFÍA

- Agyeman, Julian (2013). *Introducing just Sustainabilities: Policy, Planning, and Practice*. London: Zed Books Ltd.
- Alonso González, Marian (2016). «Opinión pública y web 2.0. Las redes digitalizan el barómetro político en España». *Revista Mexicana de Opinión Pública*, 21: 95-113. doi:10.1016/j.rmop.2016.07.004
- Arendt, Hannah (2005). *La condición humana*. Barcelona: Paidós Surcos.
- Aristondo, Oihana y Onaindia, Eneritz (2018). «Inequality of Energy Poverty between Groups in Spain». *Energy*, 153: 431-442. doi:10.1016/j.energy.2018.04.029.
- Aritzía, Tomás; Boso, Alex y Tironi, Manuel (2017). «Sociologías de la energía. Hacia una agenda de investigación». *Revista Internacional de Sociología*, 75(4): eo74. doi: 10.3989/ris.2017.75.4.17.07
- Asamblea General de Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda para el desarrollo sostenible*. Disponible en: https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf, acceso el 5 de febrero de 2019.
- Baccaro, Lucio (2006). «Civil Society Meets the State: Towards Associational Democracy?». *Socio-Economic Review*, 4(2): 185-208. doi: 10.1093/SER/mwj031
- Baldwin, Elizabeth; Rountree, Valerie y Jock, Janet (2018). «Distributed Resources and Distributed Governance: Stakeholder Participation in Demand Side Management Governance». *Energy Research and Social Science*, 3: 37-45. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.013
- Bedi, Heather Plumridge (2018). «“Our Energy, our Rights”: National Extraction Legacies and Contested Energy Justice Futures in Bangladesh». *Energy Research and Social Science*, 41: 168-175. doi: 10.1016/j.erss.2018.04.009
- Bernard, H. Russel; Wutich, Amber y Ryan, Gery W. (2016). *Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches*. London: Sage Publications.

- Besagni, Giorgio y Borgarello, Marco (2019). «The Socio-demographic and Geographical Dimensions of Fuel Poverty in Italy». *Energy Research and Social Science*, 49: 192-203. doi: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.11.007>
- Bickerstaff, Karen; Walker, Gordon y Bulkeley, Harriet (eds.) (2013). *Energy Justice in a Changing Climate: Social Equity and Low-carbon Energy*. London: Zed Books Ltd.
- Bijlsma, Rianne et al. (2011). «An Empirical Analysis of Stakeholders' Influence on Policy Development: The Role of Uncertainty Handling». *Ecology and Society*, 16(1): 51. Disponible en: <https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art51/>, acceso el 29 de junio de 2018.
- Boardman, Brenda (1991). *Fuel Poverty*. London: Belhaven Press.
- Boladeras, Margarita (2011). «La opinión pública en Habermas». *Análisis*, 26: 51-70.
- Bonatz, Nora et al. (2019). «A Comparative Study of the Interlinkages between Energy Poverty and Low Carbon Development in China and Germany by Developing an Energy Poverty Index». *Energy and Building*, 183: 817-831. doi:10.1016/j.enbuild.2018.09.042
- Bouzarovski, Stefan (2018). *Energy Poverty: (Dis)Assembling Europe's Infrastructural Divide*. London: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-319-69299-9
- Bouzarovski, Stefan; Petrova, Saska y Sarlamanov, Robert (2012). «Energy Poverty Policies in the EU: A Critical Perspective». *Energy Policy*, 49: 76-82.
- Castán Broto, Vanessa et al. (2018). «Energy Justice and Sustainability Transitions in Mozambique». *Applied Energy*, 228: 645-655. doi:10.1016/j.apenergy.2018.06.057
- Castells, Manuel (2012). *Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet*. Madrid: Alianza Editorial.
- Charmaz, Kathy (2008). «Grounded Theory as an Emergent Method». En: Hesse-Biber, S. N. y Leavy, S. P. (eds.). *Handbook of Emergent Methods*. New York: Guilford Press.
- Conde, Fernando (2010). *Análisis sociológico del sistema de discursos*. Madrid: CIS.
- Crespi, Irving (2000). *El proceso de opinión pública: cómo habla la gente*. Barcelona: Ariel.
- Day, Rosy; Walker, Gordon y Simcock, Neil (2016). «Conceptualising Energy Use and Energy Poverty Using a Capabilities Framework». *Energy Policy*, 93: 255-264. doi: 10.1016/j.enpol.2016.03.019.
- Dijk, Teun van (ed.) (1985). *Handbook of Discourse Analysis*. 4 vols. London-Orlando: Academic Press.
- Dijk, Teun van (2018). «Socio-cognitive Approach». En: Flowerdew, J. y Richardson, J. E. (eds.). *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies*. London: Routledge.
- Dusyik, Nichole; Axsen, John y Dullemond, Kia (2018). «Who Cares about Climate Change? The Mass Media and Socio-political Acceptance of Canada's Oil Sands and Northern Gateway Pipeline». *Energy Research and Social Science*, 37: 12-21. doi:10.1016/j.erss.2017.07.005
- Ferry, Jean-Marc et al. (1992). *El nuevo espacio público*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Flowerdew, John y Richardson, John E. (eds.) (2018). *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies*. London: Routledge.
- Fortier, Marie-Odile P. et al. (2019). «Introduction to Evaluating Energy Justice across the Life Cycle: A Social Life Cycle Assessment Approach». *Applied Energy*, 236: 211-219. doi:10.1016/j.apenergy.2018.11.022
- Franco, Andrea et al. (2017). «A Review of Sustainable Energy Access and Technologies for Healthcare Facilities in the Global South». *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 22: 92-105. doi: 10.1016/j.seta.2017.02.022
- Freeman, R. Edward ([1984] 2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Freeman, R. Edward y Reed, David L. (1983). «Stockholders and Stakeholders. A New Perspective in Corporate Governance». *California Management Review*, 3: 88-106.
- Fuller, Sara y McCauley, Darren (2016). «Framing Energy Justice: Perspectives from Activism and Advocacy». *Energy Research and Social Science*. 11: 1-8. doi: 10.1016/j.erss.2015.08.004
- García, Rigoberto (2014). *Pobreza energética en Latinoamérica*. CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36661/1/S2014039_es.pdf, acceso el 5 de febrero de 2019.
- García-Ochoa, Rigoberto y Graizbord, Boris (2016). «Caracterización de la pobreza energética en México». *Economía, sociedad y territorio*, 51: 289-337.

- Gillard, Ros; Snell, Carolyn y Bevan, Mark (2017). «Advancing an Energy Justice Perspective of Fuel Poverty: Household Vulnerability and Domestic Retrofit Policy in the United Kingdom». *Energy Research and Social Science*, 29: 53-61. doi: 10.1016/j.erss.2017.05.012
- Grevisse, Francois y Brynart, Marie (2011). «Energy Poverty in Europe: Towards a More Global Understanding.» En: *ECEEE 2011 Summer Study. Energy Efficiency First: The Foundation of Low Carbon Society*. Disponible en: <http://proceedings.eceee.org/visabstrakt.php?event=1&doc=2-478-11>, acceso el 29 de junio de 2018.
- Habermas, Jürgen (1981). *Historia y crítica de la opinión pública*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Healy, Jonathan (2004). *Fuel Poverty and Health: A Pan European Analysis*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
- Heffron, Raphael G. y McCauley, Darren (2017). «The Concept of Energy Justice across the Disciplines». *Energy Policy*, 105: 658-667. doi: 10.1016/j.enpol.2017.03.018
- Heffron, Raphael, G.; McCauley, Darren y Zarazua, Gerardo (2018). «Balancing the Energy Trilemma through the Energy Justice Metric». *Applied Energy*, 229: 1191-1201. doi:10.1016/j.apenergy.2018.08.073
- Hettinga, Sanne; Nijkamp, Peter y Scholten, Henk (2018). «A Multi-stakeholder Decision Support System for Local Neighbourhood Energy Planning». *Energy Policy*, 116: 277-288. doi: 10.1016/j.enpol.2018.02.015
- Jenkins, Kirsten et al. (2016). «Energy Justice: A Conceptual Review». *Energy Research and Social Science*, 11: 174-182. doi: 10.1016/j.erss.2015.10.004
- Jenkins, Kirsten (2018). «Setting Energy Justice Apart from the Crowd: Lessons from Environmental and Climate Justice». *Energy Research and Social Science*, 39: 117-121. doi: 10.1016/j.erss.2017.11.015
- Karasek, Jirí y Pojar, Jan (2018). «Programme to Reduce Energy Poverty in the Czech Republic». *Energy Policy*, 115: 131-137. doi: 10.1016/j.enpol.2017.12.045
- Kiviniemi, Mari (1999). «Profiles of Citizenship: Elaboration of a Framework for Empirical Analyses». En: Bussemaker, J. (ed.). *Citizenship and Welfare State Reform in Europe*. London: Routledge.
- Kozulj, Roberto (2009). *Contribución de los servicios energéticos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la mitigación de la pobreza en América Latina y el Caribe*. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3720/S2007029_es.pdf?sequence=1, acceso el 5 de febrero de 2019.
- LaBelle, Michael C. (2017). «In Pursuit of Energy Justice». *Energy Policy*, 107: 615-620. doi: 10.1016/j.enpol.2017.03.054
- Lewis, Paul (1982). *Fuel Poverty Can Be Stopped*. Bradford: National Right to Fuel Campaign.
- Listo, Romy (2018). «Gender Myths in Energy Poverty Literature: A Critical Discourse Analysis». *Energy Research and Social Science*, 38: 9-18. doi: 10.1016/j.erss.2018.01.010
- Lluch, Pilar (2015). «Podemos: nuevos marcos discursivos para tiempos de crisis. Redes sociales y liderazgo mediático». *Revista Dígito*, 1: 111-125.
- Malakar, Yuwan; Herington, Matthew J. y Sharma, Vigya (2019). «The Temporalities of Energy Justice: Examining India's Energy Policy Paradox Using Non-western Philosophy». *Energy Research and Social Science*, 49: 16-25. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.11.002>
- Martínez-Alfaro, Marianna (2014). *La participación ciudadana como práctica sociopolítica en Aragón. Un abordaje desde el paradigma de la democracia cognitiva y el pensamiento complejo*. Universidad de Zaragoza. [Tesis doctoral].
- Monyei, Chukwuka G. et al. (2018). «Nigeria's Energy Poverty: Insights and Implications for Smart Policies and Framework towards a Smart Nigeria Electricity Network». *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81: 1582-1601. doi: 10.1016/j.rser.2017.05.237
- Nielsen, Lasse y Axelsen, David V. (2016). «Capabilityarian Sufficiency: Capabilities and Social Justice». *Journal of Human Development and Capabilities*, 18(1): 46-59. doi: /10.1080/19452829.2016.1145632
- Nogales, Antonio y Mancinas, Rosalba (2014). «Los diarios de referencia en el mercado de la prensa española. Propiedad, grupos mediáticos y conexiones estructurales». *Correspondencias y Análisis*, 4: 307-333. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11441/32644>
- Nussbaum, Marta C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Okushima, Shinichiro (2016). «Measuring Energy Poverty in Japan, 2004-2013». *Energy Policy*, 98: 557-564. doi: 10.1016/j.enpol.2016.09.005
- Oswald, Ursula (2017). «Seguridad, disponibilidad y sustentabilidad energética en México». *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 230: 155-196.
- Papada, Lefkthea y Kaliampakos, Dimitris (2016). «Developing the Energy Profile of Mountainous Areas». *Energy*, 107: 205-214. doi: 10.1016/j.energy.2016.04.011
- Pérez, Alejandro C. et al. (2015). «Evolution of the Environmental Justice Movement: Activism, Formalization and Differentiation». *Environmental Research Letters*, 10. doi:10.1088/1748-9326/10/10/105002
- Pérez-Fargallo, Carlos et al. (2018). «Fuel Poverty Potential Risk Index in the Context of Climate Change in Chile». *Energy Policy*, 113: 157-170. doi: 10.1016/j.enpol.2017.10.054
- Poruschi, Lavinia y Ambrey, Christopher L. (2018). «Densification, what Does it Mean for Fuel Poverty and Energy Justice? An Empirical Analysis». *Energy Policy*, 117: 208-217. doi: 10.1016/j.enpol.2018.03.003
- Reed, Mark (2008). «Stakeholder Participation for Environmental Management». *Biological Conservation*, 141(10): 2417-2431. doi: 10.1016/j.bioccon.2008.07.014
- Roberts, Peri (2013). «Nussbaum's Political Liberalism: Justice and the Capability Threshold». *International Journal of Social Economics*, 40(7): 613-623. doi: 10.1108/IJSE-2012-0136
- Robinson, Caitlin; Bouzarovski, Stefan y Lindley, Sarah (2018). «“Getting the Measure of Fuel Poverty”: The Geography of Fuel Poverty Indicators in England». *Energy Research and Social Science*, 36: 79-93. doi: 10.1016/j.erss.2017.09.035
- Romero, José Carlos; Linares, Pedro y López, Xiral (2018). «The Policy Implications of Energy Poverty Indicators». *Energy Policy*, 115: 98-118. doi: 10.1016/j.enpol.2017.12.054
- Sanz-Hernández, Alexia (2019). «Social Engagement and Socio-genesis of Energy Poverty as a Problem in Spain». *Energy Policy*, 124: 286-296. doi: 10.1016/j.enpol.2018.10.001
- Scarpellini, Sabina et al. (2015). «Analysis of Energy Poverty Intensity from the Perspective of the Regional Administration: Empirical Evidence from Households in Southern Europe». *Energy Policy*, 86: 729-738. doi:10.1016/j.enpol.2015.08.009
- Scarpellini, Sabina et al. (2017). «The Mediating Role of Social Workers in the Implementation of Regional Policies Targeting Energy Poverty». *Energy Policy*, 106: 367-375. doi: 10.1016/j.enpol.2017.03.068
- Schlosberg, David (2009). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Shaw, Christofer et al. (2018). «Intermediaries' Perspectives on the Public's Role in the Energy Transitions Needed to Deliver UK Climate Change Policy Goals». *Energy Policy*, 116: 267-276. doi:10.1016/j.enpol.2018.02.002
- Simoës, Sofia, G.; Gregorio, Vera y Seixas, Júlia (2016). «Mapping Fuel Poverty in Portugal». *Energy Procedia*, 106: 155-165. doi: 10.1016/j.egypro.2016.12.112
- Simpson, Nicholas y Basta, Claudia (2018). «Sufficiently Capable for Effective Participation in Environmental Impact Assessment?». *Environmental Impact Assessment Review*, 70: 57-70. doi: 10.1016/j.eiar.2018.03.004
- Sovacool, Benjamin y Dworkin, Michael (2015). «Energy Justice: Conceptual Insights and Practical Applications». *Applied Energy*, 142: 435-444. doi: 10.1016/j.apenergy.2015.01.002
- Sovacool, Benjamin et al. (2017). «New Frontiers and Conceptual Frameworks for Energy Justice». *Energy Policy*, 105: 677-691. doi: 10.1016/j.enpol.2017.03.005
- Subirats, Joan (1999). *¿Existe sociedad civil en España?: responsabilidades colectivas y valores públicos*. Madrid: Fundación Encuentro.
- Tascón, Mario y Quintana, Yolanda (2012). *Ciberactivismo. Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas*. Madrid: La Catarata.
- Thomson, Harriet y Snell, Carolyn (2013). «Quantifying the Prevalence of Fuel Poverty across the European Union». *Energy Policy*, 52: 563-572. doi: 10.1016/j.enpol.2012.10.009
- Tirado Herrero, Sergio et al. (2018). *Pobreza Energética en España 2018. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatales*. ACA. Disponible en: <https://niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/informe%20pobreza%20energética%202018.pdf>, acceso el 12 de febrero de 2019.

- Toivanen, Pasi *et al.* (2017). «Finland's Energy System for 2030 as Envisaged by Expert Stakeholders». *Energy Strategy Reviews*, 18: 150-156. doi: 10.1016/j.esr.2017.09.007
- Townsend, Peter (1979). *Poverty in the United Kingdom*. London: Allen Lane and Penguin Books. Disponible en: <http://www.poverty.ac.uk/free-resources-books/poverty-united-kingdom>.
- Walker, Gordon y Day, Rosie (2012). «Fuel Poverty as Injustice Integrating Distribution: Recognition and Procedure in the Struggle for Affordable Warmth». *Energy Policy*, 49: 69-75. doi: 10.1016/j.enpol.2012.01.044
- Williams, Step y Doyon, Andreeanne (2019). «Justice in Energy Transitions». *Environmental Innovation and Societal Transitions* (en prensa). doi: 10.1016/j.eist.2018.12.001
- Wolton, Dominique (1997). *Penser la communication*. Paris: Flammarion.

RECEPCIÓN: 29/06/2018

REVISIÓN: 17/01/2019

APROBACIÓN: 11/04/2019

Media and stakeholders: Contribution to the Public Debate on Poverty and Energy Justice in Spain

Medios de comunicación y stakeholders: contribución al debate público de la pobreza y justicia energética en España

Alexia Sanz-Hernández

Key words

Social and Digital Medias

- Energy Justice
- Stakeholders
- Citizen Participation
- Energy Poverty

Palabras clave

Medios sociales y digitales

- Justicia energética
- Partes interesadas
- Participación ciudadana
- Pobreza energética

Abstract

The media and the different social actors have played an important role in shaping public opinion about energy poverty and injustice in Spain. A mixed-design study analysed the composition of stakeholder groups, their degree of involvement and participation, their substantial contributions to the reduction of inequality, and their communication strategies. Both content analysis and qualitative analysis were used by adopting a well-founded approach to 478 news items from the digital press, published between 2012 and 2017. The study concluded that energy poverty has been addressed from the welfare and conjunctural perspective and that this has led the media advocate energy justice and collective empowerment in order to achieve energy citizenship.

Resumen

Los medios de comunicación y los diferentes actores sociales han jugado un importante papel en la formación de opinión pública en torno a la pobreza e injusticia energética en España. Una investigación con un diseño mixto ha permitido analizar quiénes se han conformado en grupos de interés, su grado de implicación y participación, sus sustanciales contribuciones para la reducción de la desigualdad y sus estrategias comunicativas. Se han analizado 478 noticias de la prensa digital, publicadas entre 2012 y 2017, utilizando análisis de contenido y análisis cualitativo con enfoque fundamentado. La investigación concluye que la pobreza energética se ha afrontado desde el plano asistencial y coyuntural y que este hecho ha propiciado la reclamación mediática de justicia energética y de empoderamiento colectivo para el logro de la ciudadanía energética.

Citation

Sanz-Hernández, Alexia (2019). "Media and Stakeholders: Contribution to the Public Debate on Poverty and Energy Justice in Spain". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 168: 73-92. (<http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.168.73>)

Alexia Sanz-Hernández: Universidad de Zaragoza | alexsanz@unizar.es

INTRODUCTION

The unmet energy needs of the Spanish population became sufficiently visible to drive different stakeholders to enter the public debate on energy poverty from 2012 onwards (Sanz-Hernández, 2019).

Firstly, this paper argues that this debate has been largely carried out in the media, which have become important actors in shaping public opinion on energy poverty. Secondly, it describes how the media have reflected the shift in the emerging way of thinking towards concepts of justice, by taking into account the discourses of those stakeholders that have demanded that ideas of justice be incorporated into energy policies. Finally, the idea that the media have become a preferred form of direct participation for different stakeholders is discussed.

Social and digital media are increasingly being considered by society as a way of directly participating in public affairs (Martínez-Alfaro, 2014). This use of the media as a participatory channel may be deemed to be related to the inefficiency of the Spanish institutional participation systems (Subirats, 1999; Martínez-Alfaro, 2014: 164). It could also be related to the existence of restrictions in opportunities for participation in the governance of the electricity sector, often justified by its technical and complex nature (Baldwin *et al.*, 2018). Or it could ultimately be argued that energy policies are limited by the principle of subsidiarity, and as such have been largely shaped by rigid instruments linked to a single market (Bouzarovski, 2018), which denies citizens the ability to participate.

Be that as it may, the existing empirical evidence suggests that it is realistic to think that the global transitions in relation to energy and environmental policies will be fairer and more successful if they serve the best interests of the stakeholders (Reed, 2008; Simpson and Basta, 2018; Bedi, 2018). It has also been argued that it would be appropri-

ate to implement participatory processes which include those actors and regulatory institutions involved in the governance of the electricity sector (Toivanen *et al.*, 2017; Shaw *et al.*, 2018). Despite this, consultation with all stakeholders is rare (e.g., Hettinga *et al.*, 2018, on the implementation of renewable or clean energy). The predominant approach is one in which the relevant competent authority assumes decision-making powers (generally subcontracting this to advisers or experts) (Biljsma *et al.*, 2011). This is the usual way of proceeding in matters related to national energy policies or to those that are directly linked to energy poverty and energy justice (Walker and Day, 2012; Gillard *et al.*, 2017; LaBelle, 2017).

Energy has become a matter of public interest and is gaining strength as a line of research in the Social Sciences (Ariztía *et al.*, 2017). In the European context, the well-established British tradition in the study of first “fuel poverty” and later energy justice was joined in the last decade by studies from practically all countries. Many of these have focused on defining and measuring energy poverty from within different national settings. These have included Greece (Papada and Kaliampakos, 2016), the Czech Republic (Karasek and Pojar, 2018), Italy (Besagni and Borgarello, 2019), and Portugal (Simoes *et al.*, 2016). Others have set guidelines for common policies based on a comparison of the different national contexts (Bouzarovski *et al.*, 2012; Thomson and Snell, 2013). Interest has also spread to Latin America, especially to Mexico and Chile (García, 2014; García-Ochoa and Graizbord, 2016; Pérez-Fargallo, 2018). In Mexico, for example, poverty and energy justice are inevitably framed within approaches based on energy security and access to energy resources (Oswald, 2017). Research on this matter has also recently been conducted in countries from other continents: Nigeria (Monyei *et al.*, 2018), Mozambique (Castán Broto *et al.*, 2018), Japan (Okushima, 2016), and Austra-

lia (Poruschi and Ambrey, 2018). Therefore, the relationship between energy, poverty and the environment, within the framework of energy justice, is now a topic of major sociological interest, which despite the paucity in research to date, it can be anticipated that it will continue to have worldwide importance (Aritzía *et al.*, 2017). However, there is little evidence that explores the relationship between the energy issue and the shaping of public opinion (Sanz-Hernández, 2019).

This paper analyses how stakeholders have demanded not only an increase in participation in the design and development of public energy policies (specifically in terms of energy poverty), but also the right to make energy decisions (energy justice), including the right to access energy resources within environmentally sustainable limits to have a decent life (energy sovereignty).

The study starts from the consideration that the media are a rather significant source of information for the social sciences (e.g. Dusyk *et al.*, 2018), because they both reflect and configure these public discourses. The methodological strategy chosen was the sociological analysis of the discourse of a documentary corpus of 478 journalistic articles from the Spanish digital press published between 2012 and 2017. Each article was treated as a discourse for the purposes of the analysis (Conde, 2010; van-Dijk, 1985, 2018; Flowerdew and Richardson, 2018). This methodology has been little-used in energy justice studies (Listo, 2018).

The paper is divided into five blocks. Section 2 shows the theoretical framework used to support the relationship between energy and poverty, on the one hand, and the theory of public opinion, on the other. This framework was constructed on the basis of two central sociological categories, namely energy poverty and energy justice. The methodological framework is also described in the last subsection of section 2. The findings are presented in the section 3, followed by a dis-

cussion in the section 4. The conclusion is presented in the section 5.

STATE OF THE ART. METHOD

Approaches to the definition and measurement of energy poverty

Fuel poverty was particularly analysed in the United Kingdom from the 1980s onwards. As studies spread to the rest of Europe, the term “energy poverty” became more frequent. It is understood here that both terms refer to the same phenomenon. The two main approaches to research into energy poverty have focused on subsistence and consensus (García, 2014). The first approach conceptualises energy poverty in relation to the difficulty households have in reaching minimum temperature thresholds that allow thermal comfort, or, in relation to the percentages of income that households must allocate for their energy expenditure. The pioneering studies of the British school led by Lewis are in this line (1982), as well as the highly cited studies by Brenda Boardman (1991). The second, consensus-based approach, is aimed at overcoming the methodological limitations in the measurement of energy poverty. Its main contribution was the incorporation of the perceptive and evaluative dimensions (Healy, 2004) and of “relativism”. It is based on the perspective of “relative deprivation” developed by Peter Townsend in his studies on poverty (1979) and is at the base of Grevisse and Brynart’s (2011). In addition to these two approaches, more recent proposals have also addressed the historical-contextual dimension, on the understanding that time and place (the social uses of energy) shape the needs, satisfiers and economic goods according to social and cultural conventions (García, 2014).

The successive theoretical redefinition of the notion of energy poverty has been accompanied by empirical evidence based on more refined objective and subjective indi-

cators, as well as of measurement models that have allowed the phenomenon to be quantified and qualified in each country (Robinson *et al.*, 2018), and the different contexts to be compared (e.g. Bonatz, 2019).

In the Spanish case, studies have predominated based on objective indicators (Romero *et al.*, 2018; Aristondo and Onaindia, 2018). However, the latest report of the Association of Environmental Sciences (ACA) related to 2016 is based on four primary indicators recommended by the EU Energy Poverty Observatory (EPOV). Two of these are calculated on the basis of household expenses and income, and the other two are based on household perceptions and reports. Using this methodology, it was calculated that 10% of Spanish households lived with low temperatures and had delays in the payment of their bills in 2016. In 2007, just before the economic crisis, 6% of households were in this situation. These new indicators show that the problem is greater than revealed in the previous reports, also issued by the ACA in 2012, 2014 and 2016. These estimated that about 19.1 million people experienced conditions associated with energy poverty in 2010 - the equivalent of 41% of the Spanish population. In 2016, the amount was reported to have been reduced to 13.2 million people and 5.1 million households (Tirado Herrero *et al.*, 2018).

This study has taken that a household is in energy poverty when it is unable to pay for enough energy services to satisfy their domestic, personal and social needs. The concept of need is key, as it is not just limited to biological or physical well-being. Marta Nussbaum (2011) identified ten capacities or constituent parts of human development, and poverty can be understood as deprivation of such capacities (Day *et al.*, 2016). In the same line, Nielsen and Axelsen (2016) mentioned three meta-categories of needs, in which those related to energy can be conceptualised as: a) biological and physical well-being; b) autonomy, training and knowl-

edge; and c) the search for valuable purposes within the community. The latter allows a link to be made to the notion of energy justice.

From the conceptualisation of energy poverty to the demand for energy justice

Using the term “energy justice” is essentially recognising the ability of people to make energy decisions that improve their quality of life (Castán Broto *et al.*, 2018). Many authors have advocated setting standards of justice (Roberts, 2013), or sufficiency thresholds (Nielsen and Axelsen, 2016; Simpson and Basta, 2018), which ensure access to affordable, safe, sustainable and modern energy supplies for all, as stated in the Millennium Development Goals (Kozulj, 2009; Franco *et al.* 2017) and in the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda of the United Nations General Assembly (2015). As the energy sector contributes significantly to the generation of global inequality (Heffron *et al.*, 2018), it is important to cause the concept of justice to be involved in the sector’s decision-making (Heffron and McCauley, 2017). This fact has recently attracted the attention of the scientific community, and has multiplied the multidisciplinary evidence focused on conceptualising and measuring the injustices generated by the energy life cycle (Fortier *et al.*, 2019), and on offering solutions in different regions across the world (Malakar *et al.*, 2019).

Originally, the energy justice approach was related to the critical discourse arising from environmental activism (Bickerstaff *et al.*, 2013; Pérez *et al.*, 2015), which linked environmental sustainability to social justice (Agyeman, 2013). However, neither the notions of environmental justice and energy justice are the same nor do they have the same logic (Jenkins, 2018; Williams and Doyon, 2019). Today, energy justice is shown to be a conceptual, analytical and decision-

making tool (Sovacool and Dworkin, 2015). Ultimately, it is a practical strategy that permeates political agendas and business models in the global energy sector. It can be defined as “global energy system that fairly disseminates both the benefits and costs of energy services, and one that has representative and impartial energy decision-making” (Sovacool *et al.*, 2017: 677).

The discourses on energy justice and its theoretical framework have been constructed on three pillars, namely the distribution of resources, the recognition of all points of view, and impartiality in the decision-making process (distributive, recognitive and procedural justice) (Schlosberg, 2009; Fuller and McCauley, 2016). In 2016, Jenkins, McCauley, Heffron, Stephan and Rehner presented a review of the existing literature on the notion of energy justice and made a theoretical proposal to re-articulate the threefold framework into an evaluative-normative axis, which is the one adopted in this study.

The shaping of public opinion on energy poverty based on the positioning of stakeholders

The most recent public opinion theory has emphasised the close connection between public space and political communication (Ferry *et al.*, 1992). The underlying theoretical elements for this research are: (a) public opinion is a dynamic, multidimensional process resulting from a continuous interaction of multiple actors (Crespi, 2000; Wolton, 1997); (b) the social sphere is crucial because it disrupts the structure of public life, thus affecting public opinion (Arendt, 2005); (c) public opinion is a result of a double consensus/dissent process that increasingly tends to happen in a digital space that gives autonomy for deliberation (Castells, 2012; Alonso, 2016), and gives visibility to some problems that are not on the public agenda (Tascón and Quintana, 2012); and (d) public opinion is both a tool of domination and an

instrument to constrain or regulate power (Habermas, 1981), thus playing a key part in overcoming the democratic deficits of contemporary policies (Boladeras, 2011).

In 2012, the onset of the Spanish media debate on energy poverty marked the start of a process involving a public exchange of discourse. There was no social awareness of energy poverty until it began to be translated into figures and narratives on life experiences. This gave visibility to a public problem that demanded to be included in the political agenda and urgently addressed. But who generated this debate and contributed to the shaping of public opinion?

A stakeholder approach, based on the well-known original notion by Freeman (Freeman and Reed, 1983; Freeman, 1984), was used in order to analyse the major actors of public interaction. These are defined here as groups or people who are affected and, in turn, affect others in the field in question; that is, those actors and regulatory institutions that articulate governance in the electricity sector.

From an empirical point of view, only the stakeholders with a public presence have been considered. These have been classified into five groups, taking into account the knowledge they hold, their decision-making ability, and their ability to influence the shaping of public opinion and changing the political agenda regarding poverty and energy justice (Figure 1).

Consequently, what was important in the methodological design was not the selection of the stakeholders, as they were a given in the research, but the choice of the media that incorporated a discourse that shaped public opinion.

The research design and the make-up of the corpus

A mixed methodological design was used which combined a qualitative strategy with a descriptive-quantitative one for the analysis

of all the news articles. These were located through search engines in the six selected digital press media, by introducing the keyword “energy poverty”. The first strategy involved the use of qualitative analytical techniques (thematic analysis), within the framework of Glaser and Strauss’s theory, formulated in 1967 (Charmaz, 2008), with the support of the MAXQDA program. The categories were not delimited *a priori*, but emerged throughout a process of open coding. The qualitative analysis focused on the identification of themes, regularities, discursive positions and roles of stakeholders.

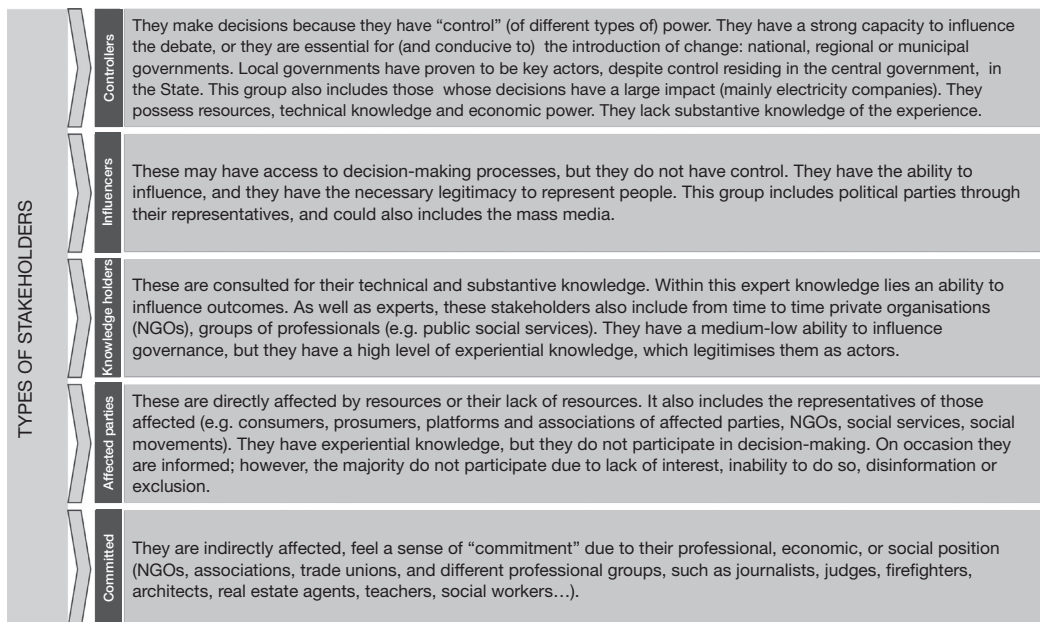
The quantitative methodological strategy used was based on classical content analysis with pre-existing codes (Bernard *et al.*, 2016). The objective was to measure variables related to visibility, for example (number of articles, stakeholder presence and date of publication), the themes addressed, the main speakers that were given a voice in the news, and stakeholder motivation when expressing themselves in the media.

In this phase, a database was set up to organise the information and to carry out a primary descriptive-quantitative analysis that addressed many variables. This tool (which cannot be elaborated on here) was essential to support the theoretical formulations resulting from the sociological critical discourse analysis.

The discourses (articles) analysed were all those that were published in the digital edition of six Spanish newspapers. The selection of these media was based on three criteria: (a) the relevance of their context, (b) the representation of three territorial levels (national, autonomous and local), and (c) the ideological basis with which the particular newspaper could be identified (Nogales and Mancinas, 2014: 314).

The two national newspapers selected were *El País* and *ABC*, both of which have national coverage and are two flagship newspapers in Spain. *El País*, represents a centre-left ideology, and has been the main quality newspaper since its appearance in the

FIGURE 1. *Stakeholders typology regarding poverty and energy justice*



1970s, with the highest figures in average circulation (226,077 copies) and average dissemination (175,041 copies in 2017), according to the office in charge of auditing the printed media in Spain (known as Oficina de Justificación de la Difusión, OJD). *ABC* has a conservative ideology, and with an average circulation of 115,291 copies in 2017.

At the regional level, research was contextualised in the autonomous region of Aragón, due to the existence of previous, pioneering studies on the impact of energy poverty in the territory (Scarpellini *et al.*, 2015) and on the role of different regional actors (Scarpellini *et al.*, 2017). *Heraldo de Aragón* and *Periódico de Aragón* were the quality newspapers taken as a point of reference from this region. In addition, it was also decided to incorporate the daily newspapers published in the other two provinces of Aragón, Huesca and Teruel (*Diario del Alto Aragón* and *Diario de Teruel*, respectively) in order to cover the local level, since regional newspapers particularly focus on the capital city, Zaragoza, which accounts for 53% of the population in the region (Instituto Nacional de Estadística, 2018). Although the Spanish State has full jurisdictional authority over energy policy (Article 149.1.13 of the Spanish Constitution), it was considered essential to include a territorial multilevel analysis, which would help to understand the role of the different stakeholders in facing poverty energy in the territory.

The sampling units (articles treated as discourses) formed the final sample that satisfied the requirement of data saturation and provided a corpus for the purpose of addressing the research questions.

RESULTS

This section includes three blocks of results that describe the process involved the shaping of Spanish public opinion on energy poverty: (i) the visibility of stakeholders, (ii) the

themes highlighted in the discourses; and (iii) the motivations and important communication strategies.

Who and what? Actors and areas of participation

The social impact of the economic crisis escalated in 2012, and first energy poverty began to be constructed as a theme, followed by a debate on energy justice shortly afterwards. In that same year, the term started to be seen in the press (Graph 1).

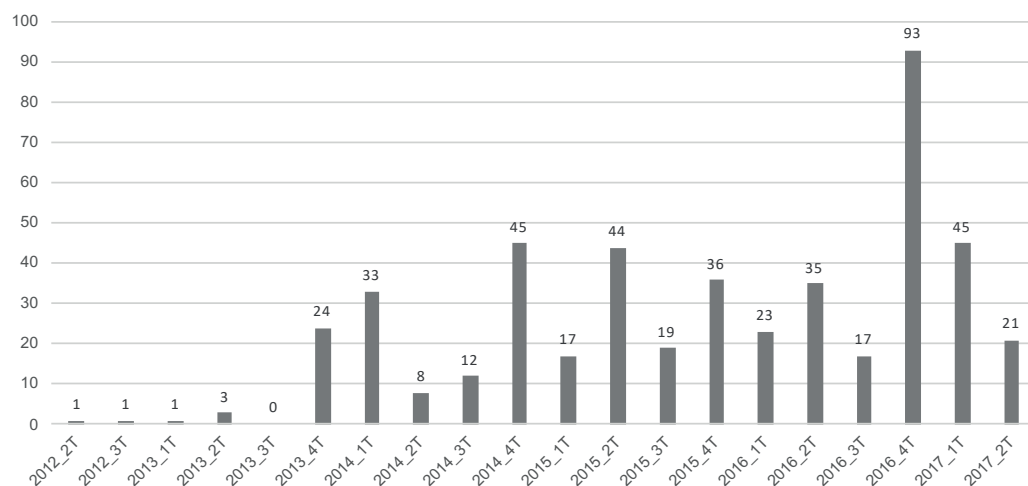
The media would explain and justify the emergence of both the new notion and the situation that it reflected in the following terms:

When the ACA (*Asociación de Ciencias Ambientales*) published the first edition of this study in 2012, hardly anybody spoke of energy poverty in Spain (...) But as the problem persists, it has ended up becoming a focus for social mobilisation (involving very active groups such as the Platform for a New Energy Model and the Alliance against Energy Poverty) and has a prominent place in political debate (Raquel Vidales, “La pobreza energética se dispara”, *El País*, 27/3/14)¹.

The stakeholders took the initiative in this public debate, adopting different discourse roles and positions, and different abilities to be influential (Table 1).

Firstly, the media presence of the different stakeholders in this period and the central element of their message (Graph 2) involved little direct participation of those affected or of the groups that represented them, and they were strongly focused on the initial stages of the process (3% of the articles). Most statements were linked to household shortfalls. They also highlighted the growing social emergency and asked for institutional and legal protection, and the reduction of energy prices.

¹ Due to space constraints, it was decided not to refer to the specific articles analysed in this paper.

GRAPH 1. Quarterly evolution of the number of news items about energy poverty (2012-2017)

Secondly, the discreet, unimportant influence and continuous participation of the experts (8%) was noteworthy. They attempted to speak about household situations from a technical point of view, discuss research related to the quantification and identification of poverty energy, engage in dissemination actions and, to a lesser extent, participate in the debate about energy policy and planning. The collective of experts refused to place themselves as part of a social emergency. Contrary to other types of discourse, the experts' voice was of interest to the media at all times and has been regularly included throughout the period analysed, although their role has not been very remarkable.

Thirdly, NGOs (7%) and social movements (5%) had a prominent, but small role. Their importance was not so much in how often they appeared as in their effective and activist participation in decisive moments (2014 and winter of 2016-2017).

The participation of the government at different territorial levels reached 29%. While local governments were involved in situations of social emergency, the provision of urgent aid to households and coping

with problems (issues such as agreements with suppliers, banks, increased budgets, joint actions with social services, etc.), the regional government was especially involved in energy planning and the intention to articulate regional legislation. Finally, most of the news in which the national government played a central role (6%) were chronologically placed in 2016, the year in which 22 of the 28 news items featuring the issue throughout the period emerged, which were devoted especially to energy policy. The central government joined the discussion at a late stage, and its discourses in general terms revolved around a denial of the problem, the lack of recognition of those affected, the justification of inaction and the dispute around jurisdictional authority, the defence of negotiation and the justification of legislative action at the end of 2016.

It was the political parties that had the greatest presence in the media (167 news items, 35%), in most cases as part of electoral communication. Initially, this theme was almost solely discussed by the new leftist parties such as *Podemos*, which efficiently handled the transition from indignation to hope

TABLE 1. *Categories of stakeholder participation in the public debate on energy poverty*

Stakeholder	Participation Levels	Role	Sociopolitical Position	Available Knowledge
Supplier companies	Control	Decision maker		Substantive/ Technical
National government	Control	Decision maker		
Regional government	Control/collaboration	Decision-maker/ implementing role	They take part	Normative/strategic
Municipal government	Collaboration	Implementing role		Procedural/experiential
Political parties	Influence	Theorist/ideologist		Strategic
Experts	Influence/ Consultation	Supplier	They are consulted	Substantive/ Technical
Social services/NGO/	Consultation/ Information	Supplier/ knowledge holder	They are informed	Experiential
Affected parties	Information/ Non-participation	Passive receiver	They are affected	Experiential

Source: By author.

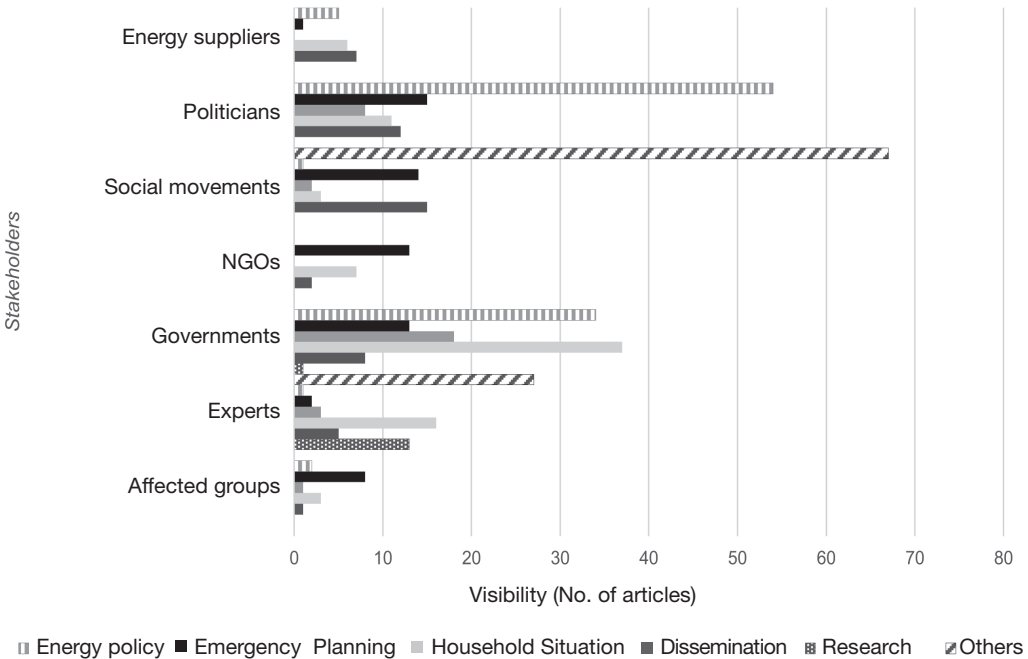
(Lluch, 2015). With the passing of time, the theme was generally appropriated by all the political parties and, consequently, energy justice became “naturally” incorporated into political discourse, substituting that of charitable care. It was a bidirectional communication process with continuous feedback between groups, which made it possible to include energy justice in the political debate.

The media participation of the private sector (supply companies) was almost anecdotal and indirect. Where it appeared, there was no recognition of the social emergency and the story relativised or attempted to reduce the extent of the problem, and even to delegitimise or question the habits and behaviour of those affected.

Finally, there was a group of very heterogeneous, but significant news items (9%), which were generated by different stakeholders with strong commitment to the cause who had spoken out at specific moments, such as professional groups (firefighters, real estate

agents, town planners, etc.), courts and judges, trade unions, banks that supported the measures adopted to address energy poverty, along with institutions such as the ombudsman, various associations, and even journalists who provided their own personal vision on the subject.

The issue that was most covered in the press was that of energy policy (28% of the news items). This was monopolised by governments and politicians. The situation and description of the affected households (25%) was a serious concern, above all, for municipal governments and experts; while the themes of social emergency and inequality and injustice (19%) were engaged in by a greater number of stakeholders: politicians, social movements, NGOs, local governments, groups of people affected, and other agents committed to the issue. They were followed by dissemination articles (15%) by social movements and political parties, articles on energy planning (9%), which was a concern of governments

GRAPH 2. *Who are involved and what do they say?*

and politicians and, finally, research on the topic (4%), which was mainly the focus of group of experts.

To sum up, the analysis of the media showed that: (1) there was a process that involved passing the responsibility for managing coping mechanisms for energy vulnerability in Spain from the private onto the public sphere; (2) public, central government institutions were slow to make decisions and take action to put in place much needed mechanisms; (3) there was a clear tendency to monopolise the limelight by public and state bodies, especially by the representatives of the political parties; and (4) the professionals most directly related to the fight against energy poverty, especially social workers in the public network, were rendered invisible (Scarpellini *et al.*, 2017).

Stakeholders, participation mechanisms and communication strategies

The needs of the stakeholders (their own or perceived in the environment) directly influenced the motives for participation, and were closely related to environmental values (Simpson and Basta, 2018: 61). The analysis of the texts showed five outstanding motivations in the news items, which were related to five “ideal” types of communicative strategies by stakeholders. Following the distinction made by Baccaro (2006) between the distributive and integrative model, the first three strategies identified (legitimizing, protest-based and instructive), all used an “egocentric” communicative action based on strategic calculation (distributive model); while the remaining two (reflective and proactive) usually opted for communicative actions based on reason and argumentation (integrative model).

The legitimising strategy proposes the defence of ideological positions, hence its analysis can reveal the power dynamics between different actors (for example, the issue of jurisdictional authority faced by local, regional and central governments). The protest-based strategy adopts an oppositional or alternative dissenting form, which places those excluded at the centre of the problem by recovering them as citizens; this is a discourse that also brings forward a call for protest and rebellion and the search for external responsibilities, which is essentially focused on the major electrical companies and on governments. The sense of social emergency was the thematic element that stood out in these texts; to emphasise it, actors very often, but not exclusively, resorted to the praxic level and to emotional support, providing stories about those affected that emphasised that their basic needs were not being covered.

The instructive-disseminative strategy focused on procedures to reduce the problem by emphasising the need for training for the “non-dependence” of the excluded. This was done mainly through discourses that emphasised the structural-institutional dimension and the solidarity and structural nature of energy poverty (vulnerable subjects who need institutional support to be true actors in their life project). Other more paternalistic, even *aporophobic* discourses can be seen in which an individualistic view dominates. This identifies people at risk of energy poverty with those who prefer to be dependent on benefits and have no motivation to overcome their situation. When this kind of discourse becomes moralising, it contains elements that “blame the excluded”, which emphasise the individual responsibility of those affected.

The reflective strategy included a variety of texts that ranged from description/quantitative analysis, either by experts or the media, using official sources, to texts from more qualitative approaches which aspired to

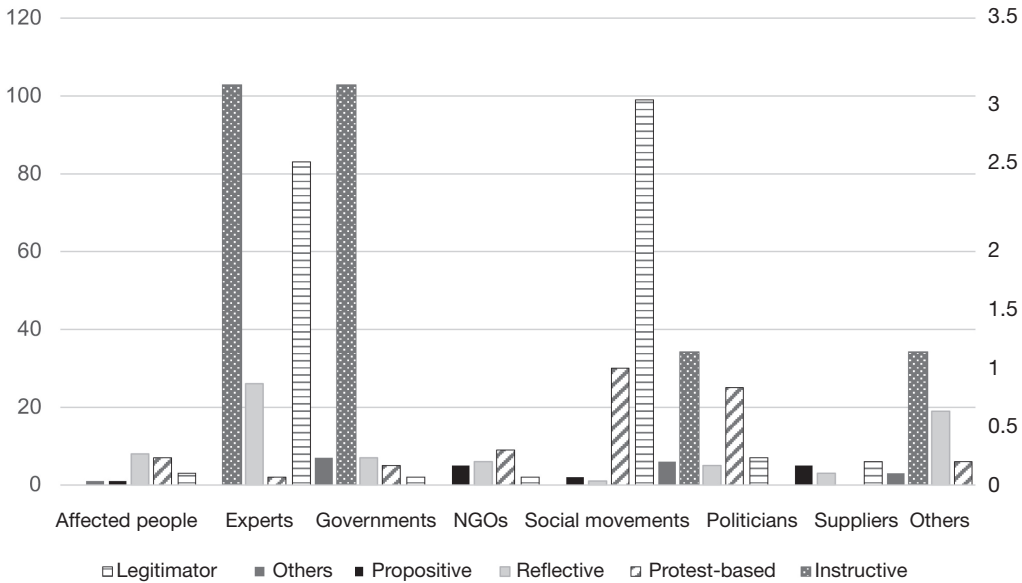
show all the facets of this phenomenon. They incorporated a social criticism attitude with the aim of moving towards integration, learning and social transformation.

The *proactive* texts incorporated proposals for improvement or suggest action strategies for solving the problem. They *psychologised* the process to some extent (by using psychological processes and dynamics in the story as motivation, attitude, resilience ...) and revealed an intended (but not always achieved) desire for de-politicisation.

In general terms, most of the texts analysed (42%) were legitimising in nature. The predominating ones were those from groups with greater decision-making capacity and influence: governments, political parties and companies. These were followed by proactive articles (19%), a strategy present in all groups, but especially important among those with the greatest capacity for action, such as local governments. The protest-based ones (18%) were largely produced by social movements, non-governmental organisations, affected groups and other groups concerned, but also, and to a lesser degree, by local governments and opposition political parties. The reflective articles (16%) were linked to experts, NGOs, those affected and others. Finally, the instructive ones (2%) came mainly from the national government and from experts (Graph 3).

DISCUSSION

The study has provided a better understanding of the social construction of energy as a public issue, and the role of different stakeholders in the shaping of public opinion in this field (Table 2). To this end, the following has been considered: (1) stakeholder participation mechanisms (contemplating the principle of construction of participation in movement); (2) the dialogical or conflicting relationships between the underlying logics

GRAPH 3. *Communication strategies and discursive forms according to stakeholders*

held by each stakeholder (dialogic principle), and (3) the understanding of the importance of each of the parties in the energy system (interdependence principle).

The first principle refers to the fact that participation is not a given, but generally must be demanded. It is procedural, dynamic and changing, and this is how it has manifested itself in the case analysed: as a process whereby citizens become empowered by demanding energy justice. From this point of view, it can be said that the energy system has increased its capacity to include different voices during the period studied, although it does not seem to have done so by articulating more or better participation mechanisms. From a chronological point of view, the process analysed reflects a clear evolution in terms of the role of the stakeholders. This evolution went from the private to the public, from the instituting to the instituted, from the civil to the political, and from the local to the national.

To socialise the issue of energy inequality and injustice, “knowledgeable” stakeholders opted first for unilateral communication

(among other participatory forms), without prior integration into the informational structure, which would require full participation. These would be accompanied by demonstrations in the streets by those who were “committed”, and after these, finally, the political debate.

Secondly, the communicative strategies were not homogeneous, but they adopted different discursive forms with equally divergent logics (one dominant and others emerging and alternative). These occurred in a relational process (according to the dialogical principle) that was sometimes complementary and other times antagonistic. The result of this, however, did not seem to have been an increase of real and effective participation of the different groups in the design of the national energy policy.

Third, a principle of interdependence emerged, by which all the actors involved were shown to be necessary to improve the energy system, insofar as they all reflected it and could all potentially contribute to transforming it. This capacity for transformation

TABLE 2. Contribution of stakeholders to the formation of public opinion on energy poverty

Parties Involved	Content of the Message (By Frequency of Appearance)	Dominant Communicative Strategies	Presence (% of Total)	When Dominant
Affected	Household shortfalls Social emergency Petition for legislative protection Request for a reduction of energy prices	Reflective Socially active	3	Early period 2012-2014 2017
Experts	Situation of households Quantification and identification of energy poverty Dissemination actions/ Energy planning policy Social emergency	Reflective Proactive	8	Continued but modest presence
NGOs	Social emergency Situation of households	Reflective Protest-based	5	Especially 2014
Social movements and associations	Social emergency Situation of households	Protest-based - Socially active	7	2014 and 2016 (autumn/ winter)
Local	Social emergency Situation of households Provision of urgent aid Coping mechanisms	Reflective Legitimizing Proactive	15	Continued presence
Governments (multilevel) (29%)	Energy planning Legislation for social emergency	Legitimizing	8	2015-2017
Regional	Energy policies Regulation of social contract	Legitimizing	6	2016-2017
National	Excuse for political struggle Energy policy/planning Social emergency	Legitimizing Proactive	35	Continuous presence First opposition parties
Political Parties	Dissemination Energy policies Measures to help households Multidimensional	Legitimizing Proactive	4	Permanent but indirect
Private sector (supply companies)				
Others		Proactive Reflective	9	Especially in the last stages

lays in the possession of skills to develop some type of knowledge (substantive, strategic/institutional, and/or experiential).

To conclude, summarising the suggestion made by Jenkins *et al.* (2016), it can be said that stakeholders promoted the necessary debate on energy justice on two levels: the evaluative (what happened?) And the normative (how can it be remedied?).

In the first plane, three contributions made by stakeholders can be distinguished in relation to the typology proposed by the aforementioned authors, following Fuller and McCauley (2016) (distribution, recognitive and procedural justice).

In *distribution justice*, stakeholders had an impact on the consumption perspective and, in particular, on the unequal access to supplies, the inequality of charges in the payment for energy, and the limitations part of the population have to access, use and enjoy it.

In *recognitive justice*, stakeholders used the media to denounce the invisibility of those affected, their vulnerability and difficulty in meeting their biological and physical needs, as well as the inequality to exercise their political rights. They also demanded that their protests were legitimate and denounced the delegitimising attempts of prominent actors that exercised control, demanding open discussion and commitment from governments.

Finally, in *procedural justice* (referring to access to decision-making processes), stakeholders identified those mechanisms that exclude and cause vulnerability, but they also made proposals regarding inclusion mechanisms to move towards energy justice. This was achieved essentially in three ways:

a) Mobilisation of the various dimensions of knowledge: substantive, strategic/normative/procedural, and experiential knowledge. Substantive knowledge (about the problem, its conceptualisation, definition, measurement, quantification, etc.) is provided mainly by experts and professionals.

Strategic, normative and procedural knowledge (directly related to the way of acting) is the prerogative of governments, political parties and organisations. And finally, experiential knowledge is linked to the stories and the personal and collective histories around the experience of those affected. This provides the emotional, evaluative and “real” dimension.

- b) Information dissemination and social learning. Stakeholders carried out important work to do with dissemination and awareness, activation of the debate and making shortcomings, struggles and uncertainties visible. They also contributed to the demand and disclosure of information on patterns of energy consumption, for example, and to the demand for transparency and accountability by governments and companies.
- c) The third way to move towards energy justice is power, being willing and able to participate, as well as being represented in decision-making institutions. Citizens are very far-removed from the decision-making bodies in energy matters, as has been shown. Participation would have an impact on the decisions made, in addition to contributing to the improvement of democratic quality and the collective work of confronting inequality.

In the second, normative plane, stakeholders identified the problem, demanded that the affected population be recognised, and proposed coping strategies, also denouncing the injustices that have occurred in Spain. This started a necessary debate that continues to be held, in the midst of a process of social learning and shaping of public opinion on the subject.

CONCLUSIONS

The case presented here is an example of demands by citizens for a review of energy policies in terms of access to and use of the

energy supply, and the demand for energy as a central element in the life of any community and just society. The national participation context presented was deficient and did not facilitate citizen participation in the decision-making processes about the distribution and consumption of energy and the distribution of its costs and benefits. Stakeholders have found that the news media can be a channel for participation in the public debate on energy poverty, inequality and justice, which in many cases has served as a substitute for institutionalised participation mechanisms. Through the media, stakeholders have shown their needs for biological and physical welfare, autonomy and training, and control of the political and material conditions of the environment in terms of energy.

The media have played a central role in the construction and socialisation of the construct of “energy poverty”, on the one hand, and in the start of the debate on energy justice, on the other. They have become a stakeholder, to the extent that they have participated in or reflected this social problem by giving a voice to others (through informative articles, follow-up of public policies, opinion, forums, editorials, personal opinions expressed in articles, repeated coverage, etc.).

Using the media has made an analysis of the discourses used by the parties interested in taking part in the public debate (who), the content of their message, directly linked to their own perceived needs or those of the environment (what), and the way in which they have conveyed them (communicative strategies) (how).

The study has a limitation in that it only collected the discourses of those who have expressed themselves through social and digital media, so it has not covered the opinion of an important part of the population, especially of professionals and the most vulnerable population. Therefore, it should be furthered empirically through studies with different methodological designs. An

interesting line of potential research concerns cyber-activism and the capacity of digital media and social networks to give visibility to the problems that are not on the public agenda.

It can be concluded that, with their media participatory practice, the most active stakeholders proposed a revision of the different dimensions of the notion of citizenship (Kiviniemi, 1999). At a praxis level, which brings together socio-political practices, they have brought the harsh reality of energy poverty closer to Spanish society. At the ideological and cultural level (linked to the cultural criteria that give meaning to identities, to community and to belonging to it), they questioned the educational and cultural foundations that sustain inequality and energy injustice. And, finally, at the institutional and formal level (framework of rights and duties that sustains the relationship of civic belonging), they demanded additional mechanisms of participation and the right of citizens to participate in decision-making processes. Ultimately, they have made a claim for energy citizenship within a framework of justice.

BIBLIOGRAPHY

- Agyeman, Julian (2013). *Introducing just Sustainabilities: Policy, Planning, and Practice*. London: Zed Books Ltd.
- Alonso González, Marian (2016). “Opinión pública y web 2.0. Las redes digitalizan el barómetro político en España”. *Revista Mexicana de Opinión Pública*, 21: 95-113. doi:10.1016/j.rmop.2016.07.004
- Arendt, Hannah (2005). *La condición humana*. Barcelona: Paidós Surcos.
- Aristondo, Oihana and Onaindia, Eneritz (2018). “Inequality of Energy Poverty between Groups in Spain”. *Energy*, 153: 431-442. doi:10.1016/j.energy.2018.04.029
- Ariztía, Tomás; Boso, Alex and Tironi, Manuel (2017). “Sociologías de la energía. Hacia una agenda de investigación”. *Revista Internacional de Sociología*, 75(4): eo74. doi: 10.3989/ris.2017.75.4.17.07

- Asamblea General de Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda para el desarrollo sostenible*. Available at: https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf, access February 5, 2019.
- Baccaro, Lucio (2006). "Civil Society Meets the State: Towards Associational Democracy?". *Socio-Economic Review*, 4(2): 185-208. doi: 10.1093/SER/mwj031
- Baldwin, Elizabeth; Rountree, Valerie and Jock, Janet (2018). "Distributed Resources and Distributed Governance: Stakeholder Participation in Demand Side Management Governance". *Energy Research and Social Science*, 3: 37-45. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.013>
- Bedi, Heather Plumridge (2018). "'Our Energy, our Rights': National Extraction Legacies and Contested Energy Justice Futures in Bangladesh". *Energy Research and Social Science*, 41: 168-175. doi: 10.1016/j.erss.2018.04.009
- Bernard, H. Russel; Wutich, Amber and Ryan, Gery W. (2016). *Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches*. London: Sage Publications.
- Besagni, Giorgio and Borgarello, Marco (2019). "The Socio-demographic and Geographical Dimensions of Fuel Poverty in Italy". *Energy Research and Social Science*, 49: 192-203. doi:<https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.11.007>
- Bickerstaff, Karen; Walker, Gordon and Bulkeley, Harriet (eds.) (2013). *Energy Justice in a Changing Climate: Social Equity and Low-carbon Energy*. London: Zed Books Ltd.
- Bijlsma, Rianne et al. (2011). "An Empirical Analysis of Stakeholders' Influence on Policy Development: The Role of Uncertainty Handling". *Ecology and Society*, 16(1): 51. Available at: <https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss1/art51/>, access June 29, 2018.
- Boardman, Brenda (1991). *Fuel Poverty*. London: Belhaven Press.
- Boladeras, Margarita (2011). "La opinión pública en Habermas". *Análisis*, 26: 51-70.
- Bonatz, Nora et al. (2019). "A Comparative Study of the Interlinkages between Energy Poverty and Low Carbon Development in China and Germany by Developing an Energy Poverty Index". *Energy and Building*, 183: 817-831. doi:10.1016/j.enbuild.2018.09.042
- Bouzarovski, Stefan (2018). *Energy Poverty: (Dis)Assembling Europe's Infrastructural Divide*. London: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-319-69299-9
- Bouzarovski, Stefan; Petrova, Saska and Sarlamonov, Robert (2012). "Energy Poverty Policies in the EU: A Critical Perspective". *Energy Policy*, 49: 76-82.
- Castán Broto, Vanessa et al. (2018). "Energy Justice and Sustainability Transitions in Mozambique". *Applied Energy*, 228: 645-655. doi:10.1016/j.apenergy.2018.06.057
- Castells, Manuel (2012). *Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet*. Madrid: Alianza Editorial.
- Charmaz, Kathy (2008). "Grounded Theory as an Emergent Method". In: Hesse-Biber, S. N. and Leavy, S. P. (eds.). *Handbook of Emergent Methods*. New York: Guilford Press.
- Conde, Fernando (2010). *Análisis sociológico del sistema de discursos*. Madrid: CIS.
- Crespi, Irving (2000). *El proceso de opinión pública: cómo habla la gente*. Barcelona: Ariel.
- Day, Rosy; Walker, Gordon and Simcock, Neil (2016). "Conceptualising Energy Use and Energy Poverty Using a Capabilities Framework". *Energy Policy*, 93: 255-264. doi: 10.1016/j.enpol.2016.03.019
- Dijk, Teun van (ed.) (1985). *Handbook of Discourse Analysis*. 4 vols. London-Orlando: Academic Press.
- Dijk, Teun van (2018). "Socio-cognitive Approach". In: Flowerdew, J. and Richardson, J. E. (eds.). *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies*. London: Routledge.
- Dusyk, Nichole; Axsen, John and Dullemond, Kia (2018). "Who Cares about Climate Change? The Mass Media and Socio-political Acceptance of Canada's Oil Sands and Northern Gateway Pipeline". *Energy Research and Social Science*, 37: 12-21. doi:10.1016/j.erss.2017.07.005
- Ferry, Jean-Marc et al. (1992). *El nuevo espacio público*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Flowerdew, John and Richardson, John E. (eds.) (2018). *The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies*. London: Routledge.
- Fortier, Marie-Odile P. et al. (2019). "Introduction to Evaluating Energy Justice across the Life Cycle: A Social Life Cycle Assessment Approach". *Applied Energy*, 236: 211-219. doi:10.1016/j.apenergy.2018.11.022

- Franco, Andrea *et al.* (2017). "A Review of Sustainable Energy Access and Technologies for Healthcare Facilities in the Global South". *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 22: 92-105. doi: 10.1016/j.seta.2017.02.022
- Freeman, R. Edward ([1984] 2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Freeman, R. Edward and Reed, David L. (1983). "Stockholders and Stakeholders. A New Perspective in Corporate Governance". *California Management Review*, 3: 88-106.
- Fuller, Sara and McCauley, Darren (2016). "Framing Energy Justice: Perspectives from Activism and Advocacy". *Energy Research and Social Science*. 11: 1-8. doi: 10.1016/j.erss.2015.08.004
- García, Rigoberto (2014). *Pobreza energética en Latinoamérica*. CEPAL. Available at: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36661/1/S2014039_es.pdf, access February 5, 2019.
- García-Ochoa, Rigoberto and Graizbord, Boris (2016). "Caracterización de la pobreza energética en México". *Economía, sociedad y territorio*, 51: 289-337.
- Gillard, Ros; Snell, Carolyn and Bevan, Mark (2017). "Advancing an Energy Justice Perspective of Fuel Poverty: Household Vulnerability and Domestic Retrofit Policy in the United Kingdom". *Energy Research and Social Science*, 29: 53-61. doi: 10.1016/j.erss.2017.05.012
- Grevisse, Francois and Brynart, Marie (2011). "Energy Poverty in Europe: Towards a More Global Understanding." In: *ECEEE 2011 Summer Study. Energy Efficiency First: The Foundation of Low Carbon Society*. Available at: <http://proceedings.eceee.org/visabstrakt.php?event=1&doc=2-478-11>, access June 29, 2018.
- Habermas, Jürgen (1981). *Historia y crítica de la opinión pública*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Healy, Jonathan (2004). *Fuel Poverty and Health: A Pan European Analysis*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
- Heffron, Raphael G. and McCauley, Darren (2017). "The Concept of Energy Justice across the Disciplines". *Energy Policy*, 105: 658-667. doi: 10.1016/j.enpol.2017.03.018
- Heffron, Raphael G.; McCauley, Darren and Zarazua, Gerardo (2018). "Balancing the Energy Trilemma through the Energy Justice Metric". *Applied Energy*, 229: 1191-1201. doi:10.1016/j.apenergy.2018.08.073
- Hettinga, Sanne; Nijkamp, Peter and Scholten, Henk (2018). "A Multi-stakeholder Decision Support System for Local Neighbourhood Energy Planning". *Energy Policy*, 116: 277-288. doi: 10.1016/j.enpol.2018.02.015
- Jenkins, Kirsten *et al.* (2016). "Energy Justice: A Conceptual Review". *Energy Research and Social Science*, 11: 174-182. doi: 10.1016/j.erss.2015.10.004
- Jenkins, Kirsten (2018). "Setting Energy Justice Apart from the Crowd: Lessons from Environmental and Climate Justice". *Energy Research and Social Science*, 39: 117-121. doi: 10.1016/j.erss.2017.11.015
- Karasek, Jirí and Pojar, Jan (2018). "Programme to Reduce Energy Poverty in the Czech Republic". *Energy Policy*, 115: 131-137. doi: 10.1016/j.enpol.2017.12.045
- Kiviniemi, Mari (1999). "Profiles of Citizenship: Elaboration of a Framework for Empirical Analyses". In: Bussemaker, J. (ed.). *Citizenship and Welfare State Reform in Europe*. London: Routledge.
- Kozulj, Roberto (2009). *Contribución de los servicios energéticos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la mitigación de la pobreza en América Latina y el Caribe*. Available at: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3720/S2007029_es.pdf?sequence=1, access February 5, 2019.
- LaBelle, Michael C. (2017). "In Pursuit of Energy Justice". *Energy Policy*, 107: 615-620. doi: 10.1016/j.enpol.2017.03.054
- Lewis, Paul (1982). *Fuel Poverty Can Be Stopped*. Bradford: National Right to Fuel Campaign.
- Listo, Romy (2018). "Gender Myths in Energy Poverty Literature: A Critical Discourse Analysis". *Energy Research and Social Science*, 38: 9-18. doi: 10.1016/j.erss.2018.01.010
- Lluch, Pilar (2015). "Podemos: nuevos marcos discursivos para tiempos de crisis. Redes sociales y liderazgo mediático". *Revista Dígito*, 1: 111-125.
- Malakar, Yuwan; Herington, Matthew J. and Sharma, Vigya (2019). "The Temporalities of Energy Justice: Examining India's Energy Policy Paradox Using Non-western Philosophy". *Energy Research and Social Science*, 49: 16-25. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.11.002>

- Martínez-Alfaro, Marianna (2014). *La participación ciudadana como práctica sociopolítica en Aragón. Un abordaje desde el paradigma de la democracia cognitiva y el pensamiento complejo*. Universidad de Zaragoza. [Doctoral Thesis].
- Monyei, Chukwuka G. et al. (2018). "Nigeria's Energy Poverty: Insights and Implications for Smart Policies and Framework towards a Smart Nigeria Electricity Network". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81: 1582-1601. doi: 10.1016/j.rser.2017.05.237
- Nielsen, Lasse and Axelsen, David V. (2016). "Capability Sufficiency: Capabilities and Social Justice". *Journal of Human Development and Capabilities*, 18(1): 46-59. doi: /10.1080/19452829.2016.1145632
- Nogales, Antonio and Mancinas, Rosalba (2014). "Los diarios de referencia en el mercado de la prensa española. Propiedad, grupos mediáticos y conexiones estructurales". *Correspondencias y Análisis*, 4: 307-333. Available at: <http://hdl.handle.net/11441/32644>
- Nussbaum, Marta C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Okushima, Shinichiro (2016). "Measuring Energy Poverty in Japan, 2004-2013". *Energy Policy*, 98: 557-564. doi: 10.1016/j.enpol.2016.09.005
- Oswald, Ursula (2017). "Seguridad, disponibilidad y sustentabilidad energética en México". *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 230: 155-196.
- Papada, Lefkthea and Kaliampakos, Dimitris (2016). "Developing the Energy Profile of Mountainous Areas". *Energy*, 107: 205-214. doi: 10.1016/j.energy.2016.04.011
- Pérez, Alejandro C. et al. (2015). "Evolution of the Environmental Justice Movement: Activism, Formalization and Differentiation". *Environmental Research Letters*, 10. doi:/10.1088/1748-9326/10/10/105002
- Pérez-Fargallo, Carlos et al. (2018). "Fuel Poverty Potential Risk Index in the Context of Climate Change in Chile". *Energy Policy*, 113: 157-170. doi: 10.1016/j.enpol.2017.10.054
- Poruschi, Lavinia and Ambrey, Christopher L. (2018). "Densification, what Does it Mean for Fuel Poverty and Energy Justice? An Empirical Analysis". *Energy Policy*, 117: 208-217. doi: 10.1016/j.enpol.2018.03.003
- Reed, Mark (2008). "Stakeholder Participation for Environmental Management". *Biological Conservation*, 141(10): 2417-2431. doi: 10.1016/j.biocon.2008.07.014
- Roberts, Peri (2013). "Nussbaum's Political Liberalism: Justice and the Capability Threshold". *International Journal of Social Economics*, 40(7): 613-623. doi: 10.1108/IJSE-2012-0136
- Robinson, Caitlin; Bouzarovski, Stefan and Lindley, Sarah (2018). "'Getting the Measure of Fuel Poverty': The Geography of Fuel Poverty Indicators in England". *Energy Research and Social Science*, 36: 79-93. doi: 10.1016/j.erss.2017.09.035
- Romero, José Carlos; Linares, Pedro and López, Xirral (2018). "The Policy Implications of Energy Poverty Indicators". *Energy Policy*, 115: 98-118. doi: 10.1016/j.enpol.2017.12.054
- Sanz-Hernández, Alexia (2019). "Social Engagement and Socio-genesis of Energy Poverty as a Problem in Spain". *Energy Policy*, 124: 286-296. doi: 10.1016/j.enpol.2018.10.001
- Scarpellini, Sabina et al. (2015). "Analysis of Energy Poverty Intensity from the Perspective of the Regional Administration: Empirical Evidence from Households in Southern Europe". *Energy Policy*, 86: 729-738. doi:10.1016/j.enpol.2015.08.009
- Scarpellini, Sabina et al. (2017). "The Mediating Role of Social Workers in the Implementation of Regional Policies Targeting Energy Poverty". *Energy Policy*, 106: 367-375. doi: 10.1016/j.enpol.2017.03.068
- Schlosberg, David (2009). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Shaw, Christofer et al. (2018). "Intermediaries" Perspectives on the Public's Role in the Energy Transitions Needed to Deliver UK Climate Change Policy Goals". *Energy Policy*, 116: 267-276. doi:10.1016/j.enpol.2018.02.002
- Simoes, Sofia, G.; Gregorio, Vera and Seixas, Júlia (2016). "Mapping Fuel Poverty in Portugal". *Energy Procedia*, 106: 155-165. doi: 10.1016/j.egypro.2016.12.112
- Simpson, Nicholas and Basta, Claudia (2018). "Sufficiently Capable for Effective Participation in Environmental Impact Assessment?". *Environmental Impact Assessment Review*, 70: 57-70. doi: 10.1016/j.eiar.2018.03.004
- Sovacool, Benjamin and Dworkin, Michael (2015). "Energy Justice: Conceptual Insights and Practi-

- cal Applications". *Applied Energy*, 142: 435-444. doi: 10.1016/j.apenergy.2015.01.002
- Sovacool, Benjamin *et al.* (2017). "New Frontiers and Conceptual Frameworks for Energy Justice". *Energy Policy*, 105: 677-691. doi: 10.1016/j.enpol.2017.03.005
- Subirats, Joan (1999). *¿Existe sociedad civil en España?: responsabilidades colectivas y valores públicos*. Madrid: Fundación Encuentro.
- Tascón, Mario and Quintana, Yolanda (2012). *Ciberactivismo. Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas*. Madrid: La Catarata.
- Thomson, Harriet and Snell, Carolyn (2013). "Quantifying the Prevalence of Fuel Poverty across the European Union". *Energy Policy*, 52: 563-572. doi: 10.1016/j.enpol.2012.10.009
- Tirado Herrero, Sergio *et al.* (2018). *Pobreza Energética en España 2018. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatales*. ACA. Available at: <https://niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/informe%20pobreza%20energética%202018.pdf>, acces February 12, 2019.
- Toivanen, Pasi *et al.* (2017). "Finland's Energy System for 2030 as Envisaged by Expert Stakeholders". *Energy Strategy Reviews*, 18: 150-156. doi: 10.1016/j.esr.2017.09.007
- Townsend, Peter (1979). *Poverty in the United Kingdom*. London: Allen Lane and Penguin Books. Available at: <http://www.poverty.ac.uk/free-resources-books/poverty-united-kingdom>
- Walker, Gordon and Day, Rosie (2012). "Fuel Poverty as Injustice Integrating Distribution: Recognition and Procedure in the Struggle for Affordable Warmth". *Energy Policy*, 49: 69-75. doi: 10.1016/j.enpol.2012.01.044
- Williams, Step and Doyon, Andreanne (2019). "Justice in Energy Transitions". *Environmental Innovation and Societal Transitions*. doi: 10.1016/j.eist.2018.12.001
- Wolton, Dominique (1997). *Penser la communication*. Paris: Flammarion.

RECEPTION: June 29, 2018

REVIEW: January 17, 2019

ACCEPTANCE: April 11, 2019